País lejano y silenciado

s alcaldes, en sus funciones presidenciales_ desafiando el peligro
ejera de sus escoltas de seguridad si hay que morir, quieran
o juntos. Autocensura y sus ecos gritos, acorralados, es el
en de estas prácticas periodísticas cuentan que los medios
ejan hasta en el periodismo regional peruano de la clase
mpos inaccesibles se arrojan los dedos sus vecindad, en
n reliquias de sonido o abanicados de tortura. "Esta gravedad
n permanecerá. Cangrejá que esa cosa, dijo, hasta el fin.

Cuando es **Arturo Guerrero** la hemorragia, e
. Es ahí que esa impermeable cuando a los brazos de sus
l embajador Mejía Fernández, El Tiempo, o Augusto Ríos
s del Grupo Santa Domingo. Cualquier no es menos peligro
illa, nuestra vida, que el mundo peruano.

FUNDACIÓN PARA LA LIBERTAD DE PRENSA FLIP

MEDIOS PARA LA PAZ MPP

ndaro 'colonizado' comes a los embajadores de sus vecinos Hernán

País lejano y silenciado

Autocensura y prácticas periodísticas en el periodismo regional

ARTURO GUERRERO

FUNDACIÓN PARA LA LIBERTAD DE PRENSA | FLIP

MEDIOS PARA LA PAZ | MPP

País lejano y silenciado: autocensura y practicas periodísticas en el periodismo regional. la ed. – Bogotá: Fundación para la Libertad de Prensa, Medios para la Paz: 2010.

60 p. ; 17 x 24 cm

isbn 978-958-99453-1-5

Impreso en Octubre de 2010

Esta publicación fue posible gracias al apoyo del gobierno y el pueblo de Estados Unidos, a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), bajo los términos del Contrato No. 514C-00-06-00304-00. Las opiniones expresadas en este material no representan aquellas de USAID y/o las del gobierno de Estados Unidos de América.

Fundación para la Libertad de Prensa

Presidente
Ignacio Gómez

Director ejecutivo
Andrés Morales Arciniegas

www.flip.org.co

info@flip.org.co

Medios para la Paz

Presidenta de la junta directiva
Margarita Meza

Directora ejecutiva
Marisol Manrique Morales

www.mediosparalapaz.org

info@mediosparalapaz.org

Publicado por

Fundación para la Libertad de Prensa- FLIP

Medios para la Paz - MPP

Diseño gráfico
Óscar Sanabria Ramírez

Impresión
Editores Gráficos Colombia Ltda.

Texto: Arturo Guerrero Ramírez

Coordinadoras

Adriana Blanco Cortés (FLIP)

Mónica Osorio Aguiar (MPP)

Nathalia Salamanca Sarmiento (MPP)

Investigadores

Mauricio Durán Fernández

Erika Andrea Mosquera Oviedo

Sandra Viviana Pérez Cruz

Diana Rodríguez Bedoya

Claudia Rojas Forero

Talleristas

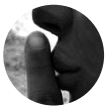
Patricia Gómez

Arturo Guerrero

Pilar Lozano

Hernando Salazar

Jorge A. Sánchez Vargas



Contenido

Agradecimientos
8

Introducción
10

La realidad perforada
12

La siembra de las semillas
19

¿A quién le conviene el silencio?
22

Alguien sugiere cobardía
27

Entre funcionarios
31

El estigma indígena
38

Para informarte mejor
42

Consideraciones de la FLIP y MPP
51

Agradecimientos

El desarrollo de esta investigación fue posible gracias al apoyo de los periodistas Sandra Liliana Godoy, Juan Pablo Sánchez, Nidia Serrano, Javier Jules y Ángel Romero, y a la colaboración de los periodistas, asociaciones locales y autoridades regionales de los departamentos de Caquetá, Chocó, Cauca, Norte de Santander, Valle, Nariño y Córdoba.

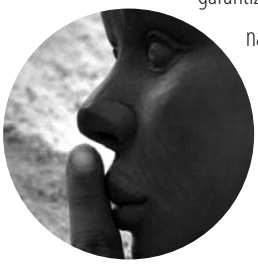
Asimismo, agradecemos el apoyo del maestro de la Fundación Nuevo Periodismo, Javier Darío Restrepo; Andrés de Alessandro, director del Foro de Periodismo Argentino FOPEA, y del periodista y caricaturista Vladdo.

Introducción

Entre agosto de 2009 y junio de 2010 se desarrolló el proyecto *Autocensura y prácticas periodísticas en el periodismo regional,* realizado por la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, y Medios para la Paz, MPP. Investigadores y talleristas de ambas organizaciones se desplazaron a siete departamentos colombianos: Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca.

Estos departamentos se seleccionaron porque en ellos hay una compleja situación de orden público, se registran más casos de violación a la libertad de expresión y un alto número de comunicadores es atendido por el Programa de Protección a Periodistas del Ministerio del Interior. Así mismo, existe una actividad periodística importante en sus capitales, ciudades intermedias y poblaciones alejadas de los principales centros urbanos. No obstante, en ellos impera el silencio que impide conocer la realidad de manera íntegra y clara.

En cada zona se sostuvieron entrevistas con periodistas locales de televisión, radio, prensa e Internet, comerciales y comunitarios, lo mismo que con representantes de gremios periodísticos. También se realizaron con autoridades y funcionarios oficiales responsables de garantizar la libertad de expresión, tales como las alcaldías municipales, las gobernaciones, la Defensoría del Pueblo, la Personería, la Contraloría, la Procuraduría y la Policía, entre otras autoridades.



Gracias a estos diálogos se realizó un diagnóstico que fue presentado y discutido posteriormente en siete foros públicos en los que participaron comunicadores y funcionarios, y en talleres en cada región con un total de

ciento cuarenta periodistas y más de cuarenta funcionarios públicos. El conjunto de entrevistas y debates tuvo carácter reservado, ya que se trató de un ejercicio de análisis y autocrítica que no pretendía ser objeto de publicación.

Este proceso reveló la situación de la autocensura en las regiones, sus causas internas y externas, y sus consecuencias que atentan contra el derecho a la información. También se establecieron recomendaciones para frenar esta práctica.

El presente documento recoge los patrones comunes y las tendencias generales halladas en el conjunto de los departamentos. Este informe no pretende reproducir la situación particular de cada uno de ellos. De ahí que los testimonios y declaraciones en su mayoría no explicitan ni la zona donde se produjeron ni la fuente que los emitió. La reserva de los nombres propios resultó esencial para la confidencialidad y protección de estas fuentes.

Algunas regiones se visibilizan porque se salen de aquellos patrones. Es el caso del Cauca con la problemática de los comunicadores indígenas y del Chocó por el componente racial y de biodiversidad propio.

La complejidad del fenómeno de la autocensura y el hecho de que no existan estudios previos suficientes, llevan a que este recuento incluya posiciones divergentes entre protagonistas y a que aparezcan más preguntas y búsquedas que acuerdos y soluciones sobre algunas materias.

Esta es, pues, una primera aproximación a una práctica que atenta contra la calidad periodística, la dignidad de los comunicadores y el derecho de la ciudadanía a estar bien informada.

La realidad perforada

Rearme de paramilitares transmutados en bandas emergentes; alianzas depravadas entre guerrillas y estos grupos criminales; asesinatos selectivos; usurpación de tierras para macroproyectos agrícolas o mineros; confinación de poblaciones a las que se les cortan suministros esenciales; desplazamiento de familias indígenas o afrocolombianas; componendas entre políticos y gobernantes locales con narcotraficantes y estructuras armadas ilegales, y corrupción administrativa, son los elementos del desastre nacional en el último lustro. Esta es la realidad que se vive en las cuatro coordenadas de la geografía de Colombia. ¿Cómo se ha enterado el país sobre el detalle de este desbarajuste? Ciertamente no ha sido por la acción de la prensa regional.

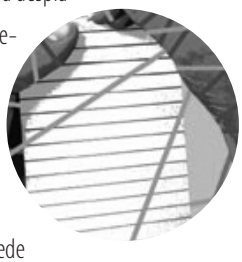
Quien quiera enterarse del panorama político, militar y social de los departamentos debe acudir, en cambio, a los indicadores consolidados de los centros de estudio independientes, a los informes de las organizaciones no gubernamentales, de la academia, de organismos internacionales o de algunas instituciones oficiales obligadas a presentar balances de la situación que les compete.

También puede atenerse a los medios nacionales, en especial a los semanarios, que tienen agenda propia y despliegan informes con denuncias. A estos los protege el hecho de que actúan desde las grandes capitales y no desde el peligroso lugar de los acontecimientos. En realidad los sonados escándalos de los últimos tiempos se han revelado gracias a los grandes medios nacionales. Pero otro es el panorama regional.

¿Qué sucede entonces con las emisoras, los canales de televisión y los periódicos locales? Callan. Dedican las horas a transmitir música o programación inane. Entregan sus

páginas a la voz de las administraciones que pautan o de los comandantes de las fuerzas armadas oficiales. Hacen periodismo de registro, de día a día, de primicia sensacional, muchas veces roja.

La prensa regional, por su parte, no hace periodismo de investigación porque no tiene recursos, no quiere "pisar callos" o prefiere resguardarse para evitar riesgos. Tampoco acude al lugar de los hechos porque no tiene medios de transporte ni dinero para desplazar enviados especiales. Se restringe a un reporte desde las capitales de departamento o de región, muchas veces limitado a consultas por teléfono. En ocasiones acepta utilizar el transporte militar, camiones, helicópteros o avionetas, a pesar del peligro que esta práctica trae a los reporteros y del condicionamiento que supone para la información.



Un periodista o investigador proveniente de Bogotá, por ejemplo, puede darse cuenta de la cantidad de información que guardan los reporteros de ciudades intermedias o provincias rurales. Se admirará de los conocimientos que tienen de su región y de las fuerzas económicas, políticas y militares que en ella se mueven, pero así mismo de la manera como evitan los temas sensibles en sus producciones profesionales.

Los reporteros, que encuentran sus historias en fuentes directas y que muchas veces padecen las consecuencias de estas historias, no las están relatando. No están contando todo lo que tienen que contar. El país lejano que ellos conocen es silenciado. Los periodistas han hecho un pacto tácito para salvaguardar sus vidas y las de sus familias, y respetan este acuerdo para vivir en sus regiones. Lo nombran con elipsis y eufemismos: "La prudencia

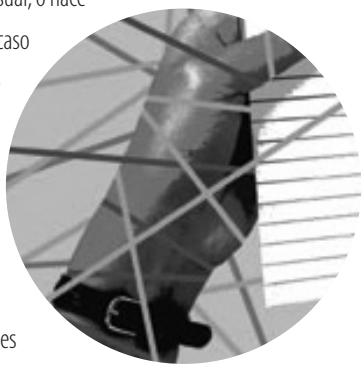
es la cuota inicial para pagar la estancia aquí". Trabajan un periodismo atemorizado o "de estómago", cuando es la pauta publicitaria la que les cierra la boca.

En efecto, si bien los grupos violentos y los políticos corruptos son los responsables de buena parte de las amenazas y atentados contra comunicadores, las condiciones laborales y el sistema de consecución de avisos publicitarios son mordazas eficaces a la libertad de información.

Los reporteros contratados dentro de la planta de un medio, generalmente los más pudientes, son "toderos" sin especialización que deben producir grandes cantidades de material para numerosas emisiones diarias, en horarios que no respetan la noche ni los festivos. En estas condiciones no es posible adelantar investigación ni seguimiento a las noticias, ni tratarlas como procesos.

Es habitual, además, que estos medios tengan definidas preferencias políticas o compromisos económicos con las fuentes. Sus periodistas comprenden que a estas "hay que hacerles pasito" o no contrariar sus intereses con la información que produzcan. En muchas regiones donde no hay industria y el comercio es débil, el Estado es el único anunciante fuerte, de manera que las autoridades se vuelven intocables.

Ahora bien, el grueso de los comunicadores regionales carece de contrato fijo o trabaja como independiente. Varios tienen un periódico semanal, quincenal o mensual, o hace un noticiero en alguna emisora de radio o canal local de televisión. En este caso opera el sistema de "cupos" publicitarios, o arrendamiento de espacios, que obliga al periodista a conseguir y contratar la pauta, al mismo tiempo que escribe y realiza sus informativos. "En una mano uno carga la cámara y en la otra las ofertas para vender", dicen estos periodistas convertidos en cobradores de noticias, en comerciantes de la información, en publicistas o en relacionistas públicos de los poderes que suministran los avisos.



Así se configura el periodismo "de estómago", una confusión de roles que trae consigo consecuencias tremendas. A su paso se levanta la especie de los periodistas "extorsivos", que difunden información falsa con el fin de presionar a los posibles clientes para que pauten. También la de los periodistas "paracaidistas", los cuales no son profesionales sino oportunistas que crean programas o hacen periódicos solo en pos del dinero de la publicidad.

La lista de temas que no se tocan en la prensa regional, por miedo a las balas o por servilismo con la pauta, es muy larga. Los habitantes locales no reciben información sobre clientelismo, conflicto armado en zonas rojas, narcotráfico y su relación con la política, pandillas urbanas, fuerzas militares, parapolítica, grupos armados y bandas criminales, ame-

nazas, problemas del medio ambiente, población homosexual, financiación de campañas políticas, despojo de tierras a campesinos, mal servicio de salud, corrupción judicial, niños vinculados al conflicto o asesinatos extrajudiciales.

De esta manera se configura un mapa de la realidad perforado por omisiones. La población muchas veces se entera de los sucesos por la vía del rumor o por las alertas que dan las comunidades, pero estos hechos no reciben el espacio ni el reconocimiento que debería darles la prensa. Por eso, después de períodos de masacres o de atentados contra los derechos humanos, la gente se pregunta: ¿dónde estaban los periodistas cuando todo esto pasaba?

Los comunicadores no son los únicos responsables de este silencio. Es toda la sociedad la que se adormeció y consintió que se arraigara una cultura de la ilegalidad. Hasta tal hondura ha calado esta posición, que ha llegado a convertirse en algo natural. La violencia, la corrupción y la mentira son vistas como parte del paisaje, en el marco de un país acostumbrado a la ley del "más vivo", donde se vale todo con tal de conseguir el lucro y el poder.

La sociedad no ha protegido a sus periodistas ni les ha exigido el cumplimiento de su deber como garantes del derecho a la información que le pertenece a la ciudadanía. Así, la democracia cojea. Sin información ponderada, íntegra y contextualizada, los votantes quedan huérfanos de criterios y vuelven a elegir a aquellos que antes han cometido delitos y no cuentan con elementos para decidir con conciencia acerca de las políticas públicas.

La atmósfera enrarecida contribuye a que los periodistas tomen como algo normal el ejercicio recortado de su profesión. Se acostumbran a trabajar cortándose las alas, piensan que su silencio es una de las maneras de protección legítima contra las amenazas o contra las decisiones coartadoras de sus medios. Cuidan "la lonchera", es decir la fuente de sus ingresos económicos, o se previenen contra "los de la moto", como se conoce a los sicarios, eliminando simplemente de su agenda informativa las temáticas incómodas. Esta conducta les parece la adecuada.

¿Qué nombre darle a este recorte voluntario, aunque en ocasiones inconsciente, del ejercicio periodístico? Se llama autocensura. Es más grave que la censura pues esta se impone desde lo externo, mientras que aquella está instalada en las circunvoluciones cerebrales del comunicador. La autocensura ha calado en lo más profundo de los mecanismos donde un periodista toma sus decisiones profesionales.

La autocensura, pues, no necesita decretos oficiales ni amenazas explícitas ni presiones directas para cumplir su papel perjudicial para la libertad de información. Actúa de manera automática porque sus resortes han sido asimilados e instalados en el interior del medio, del gremio o del individuo que informa. Una vez incorporada, la autocensura opera por contrabando, sin incomodar siquiera la conciencia de los periodistas.

De ahí que sea indispensable visibilizarla, cuestionarla, indagar por sus causas, sus mecanismos de acción y sus consecuencias. Es frecuente que los reporteros regionales a primera vista digan que en sus departamentos hay libertad de información, que sus ciudadanos acogen sus periódicos y emisiones electrónicas con interés, que el periodismo les da a sus audiencias lo que estas quieren recibir.

Basta con hacer un cuestionamiento sobre los temas vedados en los noticieros o sobre la brecha existente entre la prensa y la realidad, para que el gremio asuma una actitud defensiva. En su favor, argumentan por ejemplo que las fuentes no dan acceso a la información, que nadie en la población habla a causa del miedo, que cuando hay controversia las fuentes se retractan, que los medios nacionales no financian los desplazamientos de sus corresponsales y muchas veces irrespetan su trabajo, o que es muy difícil contrastar fuentes con los actores armados.

Si se indaga por ciertas temáticas también vedadas, como la ambiental o la cultural, los corresponsales y reporteros locales se despachan contra las políticas editoriales de los medios nacionales que, según ellos, estigmatizan la provincia y solo demandan de ella noticias de guerra, narcotráfico y corrupción. Rara vez los periodistas regionales reconocen una cuota de pereza y facilismo que lastra sus trabajos. Y, de otra parte, los funcionarios oficiales señalan la falta de preparación intelectual de muchos de estos profesionales.

A diferencia de la censura, que puede medirse por el número y gravedad de las agresiones a la libertad de información, la autocensura es un fenómeno sutil, detectable solo en reflexiones colectivas con el gremio de comunicadores. Su monitoreo, por eso, es de gran dificultad.

Incluso se presentan equívocos en su captación. Es posible que las agresiones a los periodistas hayan disminuido, como de hecho sucedió en Colombia durante la última década, pero esta mejoría no necesariamente redunda en mayor calidad de la información. Los periodistas silenciados no suman en la contabilidad de las amenazas, pero sí en el deterioro de la calidad informativa.

No hay literatura sobre el tema, como tampoco hay consenso sobre su definición. Javier Darío Restrepo propone la siguiente, que ve el problema a partir de una decisión individual del comunicador:

> **La autocensura es el silencio que el periodista se impone a sí mismo en defensa de su vida o de sus intereses.**

Desde el punto de vista de las empresas periodísticas, el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, en un informe de 2007, presentó la siguiente definición que incluye una periodización del fenómeno:

> **La autocensura es la medida interna que toma un medio de comunicación de no divulgar información por motivos de conveniencia política, personal o económica. De ordinario, la decisión se produce en las etapas finales del proceso de acopio de información (autocensura final), pero también es frecuente que, desde antes de iniciar su labor, el propio periodista se abstenga de abordar los temas prohibidos en su sala de redacción previendo que su publicación no será autorizada (autocensura previa).**

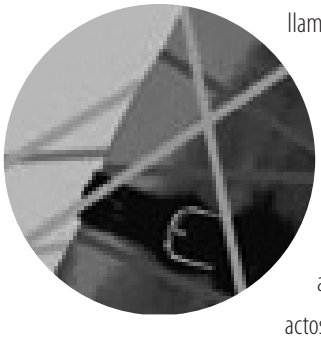
Desde ambos acercamientos queda claro que la autocensura es una decisión que toma el comunicador o el medio, pero no impuesta por medidas explícitas de los gobiernos o de las fuerzas que pretenden utilizar o manipular la prensa. No obstante, es claro que detrás de semejante determinación hay poderosos motivos e intereses.

Así lo analiza Restrepo, luego de formular la definición mencionada, en el editorial del multimedia *Autocensura y prácticas periodísticas regionales*, de la Fundación para la Libertad de Prensa y Medios para la Paz:

> **Un periodista que se autocensura representa para quien lo ha amenazado, un triunfo total, porque ha logrado que la orden de silencio llegue a la conciencia del periodista y desde allí siga impartiéndose y ejecutándose, lo cual convierte al periodista en cómplice involuntario del censurador[1].**

Las "órdenes de silencio", pues, existen, actúan y resultan a la postre más eficaces, aunque sean invisibles, que las de la censura abierta. El lenguaje de esta definición recuerda a los virus del computador que, una vez instalados en el equipo, se ejecutan solos y se difunden.

El mismo analista se refiere a las repercusiones sociales de la autocensura y las llama "ceguera progresiva y colectiva":



> **La autocensura del periodista equivale a una imposibilidad de ver lo que sucede. El periodista renuncia a ser los ojos, oídos y lengua de la sociedad e introduce en el cuerpo social la incapacidad de conocer lo que sucede, que es el paso previo para la pasividad y la manipulación.**

Quienes han puesto los cimientos de la autocensura, sean gobiernos autoritarios, anunciantes sin escrúpulos, delincuentes o perpetradores de actos de terror, tienen como propósito "conducir a su antojo la vida de la sociedad", afirma Restrepo.

En este punto conviene explicitar el dilema de tipo político y humano que existe detrás de la autocensura. Por un lado, está la legítima preocupación del periodista por su subsistencia y por la integridad física y espiritual suya y de su familia. Por otro, el derecho de la

1. FLIP- MPP. *Autocensura y prácticas periodísticas regionales.* Informe multimedia, Bogotá, 2010. www.flip.org.co/autocensura,
http://www.mediosparalapaz.org/autocensura/

sociedad a estar bien informada para coexistir en paz y lograr decisiones democráticas.

Los dos platos de esta balanza tienen el mismo peso en el momento individual de tomar decisiones. Para el periodista la información no debe representar un elemento prescindible ni una mercancía. Un comunicador equipado con criterios profesionales claros valorará la importancia de su trabajo para la comunidad y lamentará el silencio cómplice.

Desde el lado público, una sociedad consciente de su sed y hambre de buena información, tomará las medidas de protección sobre sus comunicadores. Aquí intervienen los empresarios que los deben remunerar dignamente y les deben proporcionar los elementos adecuados para su desempeño eficiente.

También juega el Estado que debe facilitar su capacitación permanente, velar por la prevención de riesgos y brindar medidas de protección. Igualmente, los anunciantes han de entender que con su dinero adquieren los espacios de publicidad, una página o un tiempo al aire, pero no están comprando al medio de comunicación completo ni la conciencia del periodista. También las fuentes hacen parte del proceso, pues son ellas las que permitirán el expedito acceso a la información.

El mencionado conflicto ético entre los intereses individuales y los sociales recibe una luz cuando se establece la diferencia entre la autocensura y la autorregulación de la información. "Ninguna nota, ninguna información, vale una vida", afirmaba el combativo periodista mexicano Jesús Blancornelas, quien fue acosado por atentados del narcotráfico y finalizó sus días a causa de una enfermedad, bastante restringido en su vida y sus movimientos.

Su colega Ignacio Rodríguez Reyna, al comentar esa frase, explicó así la filosofía que la sustenta:

> **La clave, y no hay una fórmula específica para encontrarla, es saber hasta dónde se puede llegar, hasta qué línea se encuentra el terreno firme, para saber que a partir de ahí los pasos deben calcularse profundamente. Lo último que debe hacer un periodista es paralizarse.**

Este lenguaje, cargado de metáforas, es el único capaz de acercarse a la descripción de la autorregulación. Quien se sabe regular en su trabajo periodístico, en un contexto plagado de peligros, es quien descifra la frontera del terreno firme. No opta por el silencio ante los riesgos, no se autocensura, sino que se mueve con un doble conocimiento: el del terreno que pisa y el de las potencialidades del lenguaje, su principal instrumento.

Los riesgos de ese terreno erizan la marcha. Están en los diversos momentos del trabajo, en la elaboración de la agenda informativa, en la escogencia de los criterios de noticiabilidad, en la índole de la investigación a realizar, en la cantidad y calidad de las fuentes por

consultar, en la selección de los datos encontrados, en la elección de la estructura narrativa y en las múltiples decisiones sobre el lenguaje.

Moverse en estos meandros exige una magnífica capacitación, conocimientos de diversas materias, sabiduría sobre la sociedad en que se trabaja, diafanidad en los criterios de calidad del oficio. Solo este arsenal intelectual y ético permitirá la autorregulación y evitará la autocensura.

La siembra de las semillas

La historia puede reducirse a sus ingredientes esenciales. Un veterano periodista, mayor de cincuenta años, llega a su casa al final de la tarde o sale al trabajo por la mañana. Llegan dos personas en moto, una de las cuales le descarga seis tiros mortales. La Policía logra detenerlos, pero a los pocos días la justicia los deja libres por falta de pruebas, a pesar de que alguien de la familia, testigo del hecho, los identifica.

Pese a ello, no se conocen los autores intelectuales del crimen. El presidente de la República ofrece recompensa de cincuenta millones de pesos a quien informe. Los colegas hacen una marcha de protesta y algunos recuerdan que el periodista sacrificado solía denunciar a los corruptos locales y a los parapolíticos en su noticiero o periódico. Anotan que era muy "frentero" y audaz en sus informes. En vida él siempre se defendía: "Esa es mi forma de ser, no puedo mentir". Incluso había pedido cancelar las medidas de protección, escolta o carro blindado, que le había brindado el Programa de Protección a Periodistas del Ministerio del Interior.

El resultado es triple: un asesinato, impunidad y la siembra de semillas de autocensura entre los colegas. En vista de que no pasa nada, los perpetradores se sienten autorizados a seguir atentando contra la prensa. Piensan que callando a uno, los demás se asustan y también callarán. Para aceitar el mecanismo del miedo divulgan panfletos y hacen llamadas telefónicas con amenazas y advertencias. Las autoridades insisten en que se desconocen los móviles del crimen y en que las amenazas posteriores a otros comunicadores no tienen relación con el mismo.

Los periodistas entonces aplican el "freno de mano" a sus informaciones, en procura de librarse de los sicarios o de los abogados que se empiezan a aproximar para ejercer presiones judiciales y desanimar cualquier acción legal. Los comunicadores no quieren que "los suban al cielo", como popularmente se le dice a la muerte, pues saben que "si uno cuenta la verdad, al día siguiente ya es cadáver". Para ellos "hace tiempo se acabaron los patriotas" y prefieren no ser "ni héroes, ni muertos de hambre".

Las decisiones de muchos son pragmáticas. "El miedo es algo natural –reflexiona un reportero amenazado–, por eso ahora hago periodismo, pero distinto. Porque ahora soy menos arriesgado y pienso 'yo no me voy a convertir en idiota útil de muchos ni me voy a hacer matar para que otros vivan'".

La impunidad trae consigo el desprestigio de la justicia. Los periodistas no denuncian ante las autoridades cuando son objeto de amenazas porque no creen en los organismos que administran justicia en el país y porque saben que al hacerlo atraen sobre ellos nuevos problemas.

En este clima enrarecido, las fuentes se cierran. Los funcionarios públicos dificultan o niegan el acceso a la información. Los comandantes militares consideran las solicitudes de información como actos de agresión. "Un periodista está averiguando", es el comentario habitual que trata al comunicador como un individuo intruso y que lo desarticula de la estructura del medio de comunicación para el que trabaja.

Hacer periodismo se convierte en un acto de valentía pura, una tarea titánica. Los profesionales piensan mil veces cómo escribir una noticia, de modo que esta no afecte a los grupos armados o a los gobernantes corruptos. Llegan poco a poco a establecer un pacto con la situación. La autocensura se establece de esta manera como fruto de un proceso de aprender a sobrevivir en todos los sentidos.

Las consecuencias de esta conducta no se hacen esperar. La sociedad trueca su percepción sobre el papel de la prensa. "Termina uno manicruzado –afirma un periodista–, el mismo oficio es cada día menos creíble. El periodista es odiado, es un mentiroso, un vendido, y la gente lo concibe así".

Algunos comunicadores, desmotivados y pesimistas ante el futuro de la profesión, anhelan incluso cambiar de oficio, dedicarse a la contaduría o al derecho. Los tan mentados valores de la vocación y el sacrificio que conlleva el periodismo, resultan contaminados y dejan de animar la actuación cotidiana.

A este desánimo se agrega la precariedad económica en que subsisten los reporteros de las regiones. Hay poblaciones tan alejadas que desplazarse hasta allí les cuesta doscientos mil

pesos a los corresponsales y reporteros locales. En el caso de los primeros, los canales de televisión nacionales no les reconocen esos viáticos y apenas les pagan ochenta mil pesos por nota emitida. "Estamos pagando por hacer periodismo", comentan, lo mismo que sus colegas obligados a vender cupos de publicidad para sostener sus noticieros.

Los estudiantes de comunicación social de las regiones miran con estupor esta realidad sufrida por quienes ejercen el periodismo y son veteranos en la profesión. En una proporción creciente, reorientan su aspiración laboral hacia la comunicación organizacional, por ejemplo, que es mejor remunerada y está libre de las presiones del periodismo.

No quieren ser "muertos de hambre" ni tener un porvenir "bajo tierra", como observan la realidad de los periodistas que los precedieron. Cabe entonces el interrogante sobre el futuro de la profesión en estos sitios. ¿Quiénes llegarán a ocupar la trinchera de la prensa, si los jóvenes que se preparan en la academia se niegan?

¿A quién le conviene el silencio?

Aquí se levanta una vez más una pregunta necesaria: ¿a quién le interesa que no se sepa lo que ocurre? ¿Qué fuerzas buscan acallar o torcer la información y con qué propósitos? El caso del departamento del Chocó puede dar luces.

Son proverbiales sus riquezas ambientales, el agua, las minas de oro, plata y platino, sus reservas forestales, su selva biodiversa, su fauna y flora. "Aquí pobreza no hay –exclama un periodista local–. De pronto hay desorganización, pero no hay pobreza". No obstante, esta abundancia de recursos no se refleja en la calidad de vida de los chocoanos. Tampoco conocen lo que sucede en su tierra. "Hay gente de afuera que sabe más del Chocó que ellos mismos", afirma un reportero que llama a sus colegas a empoderarse de la información, del conocimiento del departamento y a comenzar a llamar la atención sobre la zona.

La región, en su mayor extensión selvática, está poblada por comunidades indígenas y afrocolombianas que desde tiempo inmemorial conservan el uso y titulación colectiva de la tierra. Esta circunstancia les ha facilitado a los grupos armados ilegales perpetrar acciones de intimidación y expropiación forzosa que conducen al desplazamiento masivo de los habitantes originarios.

Las áreas arrebatadas son repobladas por gentes venidas de otras partes del país que se ponen al servicio de las fuerzas irregulares para reemplazar los cultivos tradicionales por ilegales. En efecto, los grupos paramilitares se apropian de las parcelas de los campesinos para imponer el monocultivo, en especial de palma aceitera. Entre las bandas emergentes que hacen presencia están "Los Rastrojos" y las "Águilas Negras", dedicadas al narcotráfico. Estos grupos, no obstante, no representan tanto peligro en la capital, Quibdó, como en las zonas rurales.

Las bandas suelen mantener enfrentamientos por el control de los corredores de droga, lo cual ha generado homicidios, víctimas de minas antipersona, reclutamientos forzados y confinamientos de comunidades. Merced a la extorsión, estas agrupaciones se apropian del producto de la riqueza minera y forestal del departamento.

Los paramilitares reorganizados, al igual que las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), se financian también con la explotación ilegal de madera y oro. La respuesta estatal a este complejo problema ha sido el incremento de despliegue de la fuerza pública, tanto en las cabeceras municipales como en las vías de comunicación.

He aquí una muestra, trágica y surrealista, de las consecuencias de semejante despojo de territorios. Por ejemplo hay, entre los pueblos del Chocó, uno llamado La Ye. Como en tantos otros cruces de caminos en Colombia, por siglos su población fue negra. Pues bien, ¡hoy todos son blancos! ¿Cómo operó tal cambio cromático? Las fuerzas ilegales llegaron, mataron a unos, a otros los obligaron a salir. Luego repoblaron el sitio con personas venidas de lejos. La periodista que contó esta historia ante un grupo reducido de colegas explicó que ningún comunicador del Chocó se atrevió a publicarla.

"Quien hable en contra de alguna multinacional que explote oro, se declara objetivo militar", agregan los periodistas silenciados. Ninguno de ellos trata el tema de la minería, a pesar de que conocen la situación de Istmina, por ejemplo, donde el cuarenta por ciento del territorio lo están dando en concesión sin consultar a la población.

"El Chocó es un baldío de la nación", concluye otro colega. El procedimiento para la explotación de minas, a juicio de un reportero, es el siguiente: "Primero vienen las balas y detrás los empresarios". Los permisos de explotación se otorgan en Bogotá, de modo que si en algún municipio alguien denuncia una irregularidad relacionada con minas, el alcalde respectivo argumenta que no puede hacer nada porque todo viene de la capital del país.

Los reporteros se hacen preguntas que mucha gente formula: ¿Quién transporta la droga si se supone que por todas partes hay controles del Ejército? Y responden con suspicacias presentes en muchas mentes: "algunos miembros del Ejército 'procesan' la droga de los paramilitares, ya que hay cercanía entre estas dos fuerzas".

Como es fácil adivinar, los periodistas no publican lo que comentan *off the record* sobre la actualidad de su departamento. Argumentan que "si los grandes medios nacionales no dicen nada, ¿qué va a poder decir un periódico regional?". De modo que el silencio no solo es fenómeno local, sino asunto de todo el país.

"El Chocó no tiene eco a nivel nacional –agregan–, el país no se interesa por el Atrato, por los afro, por la explotación irracional de los recursos. Nunca se escucha en

RCN o en Caracol que están robándose al Chocó. Sistemáticamente se ignora al Chocó, al que no sienten como parte de Colombia".

La lacra del desplazamiento ha recibido algún cubrimiento de parte de medios de comunicación de la Iglesia, cuya pastoral social es muy activa. Pero los medios comerciales la soslayan. Algunos periodistas señalan al Estado como culpable de esta situación: "Hay autocensura, sobre todo a causa de la actuación del Estado, de los alcaldes y los políticos, que obligan a las emisoras por medio de las licencias o por la pauta".

Otros actores no escapan a esta crítica: "Nadie toca el tema de las minas porque estas son de guerrilleros o de 'paras'". La conclusión de algunos es desalentadora: "No se puede imaginar una forma de acabar con la autocensura; creo que nos toca vivir con esto".

En ocasiones la guerrilla llama a una emisora para hacer divulgación de algún comunicado. Otras veces un reportero consigue el testimonio de algún miembro de la guerrilla. En el segundo caso, el periodista sencillamente se abstiene, por miedo de que al día siguiente le pongan una bomba a la estación de radio. Ese miedo se apoya en experiencias anteriores.

En el caso del comunicado, sucedió que un jefe guerrillero telefoneó a una emisora de Quibdó y preguntó a una redactora por su nombre propio. Ella pensó en su familia, en sus hijos. Como conocían su nombre, supuso que la guerrilla había hecho labores de inteligencia previamente sobre su vida y estaba enterada de sus circunstancias personales.

La periodista, intimidada, transmitió al aire el comunicado del grupo armado. Al poco tiempo la emisora del Ejército comenzó a afirmar, igualmente al aire, que los periodistas de la emisora implicada eran guerrilleros. Les habían puesto de esta manera "la lápida al cuello" a todos esos comunicadores; los habían expuesto a la acción de los violentos.

La emisora explicó a través de sus micrófonos que todo había sido por orden del grupo guerrillero, gracias a lo cual recibió el apoyo del gremio periodístico y de la población. No obstante, la siembra de la autocensura estaba hecha. La periodista se debatió entre dos fuegos y de parte de ambos recibió una cuota de intimidación.

¿A quién le conviene entonces el silencio? A todos los actores de la guerra. Además, las políticas editoriales de los medios nacionales parecen favorecer ese clima de autocensura. Los corresponsales de los canales de televisión, de los grandes periódicos y de las cadenas radiales lamentan que estos medios impongan una censura práctica basada en la estigmatización que existe sobre el Chocó.

El material que de ellos se espera debe referirse a corrupción, pues "en las grandes ciudades se piensa que los negros son perezosos, incapaces, corruptos y que no aportan". Entonces reaccionan: "El Chocó sí aporta, solo que su aporte no está visibilizado. Quieren castrar todo lo que venga del Chocó, porque quieren robar todas las riquezas del departamento".

En actitud que recuerda aquel célebre reportaje de Gabriel García Márquez sobre el intento de desmembración del Chocó en los años cincuenta del siglo pasado, algún reportero reacciona contra la afrenta nacional: "¡Estamos en mora de declararnos la República Independiente del Pacífico!".

La desmembración del Chocó es, pues, un deseo que viene del pasado, lo mismo que las circunstancias que lo originan. El departamento siempre ha sido invisibilizado. Lo novedoso es el incremento de los proyectos económicos que hoy se desarrollan en su territorio y la forma despiadada como estos se han implantado, lo cual tendrá graves consecuencias pues cambiará la realidad de la región.

Los periodistas locales hacen hincapié en las riquezas naturales codiciadas, como elementos de su desgracia. Enaltecen sus grandes activos, el agua, las minas, los bosques. Pero suelen dejar a un lado a la población, en la consideración de las ventajas del departamento.

Es como si las riquezas naturales pudieran conservarse como tales, en el caso hipotético de que fuera expulsada del territorio la actual población. Como se vio en el caso de La Ye, esta hipótesis no es una consideración remota sino una cruel mueca de la actualidad.

¿Qué pasaría con la riqueza natural si se cambiara la población? ¿Es posible separar la selva, los ríos, los árboles, de la gente que los habita? Al ser estimulados por estas preguntas, los reporteros locales reaccionan: "Si alguien responde 'sí' a esta última pregunta, es porque tiene intereses en la zona. Muchos actúan sobre el territorio como si nosotros no estuviéramos. Y no se puede olvidar el conocimiento tradicional y ancestral. Sin los chocoanos el departamento se caería".

Pero esta inclusión del componente humano en la variable natural no figuraba en el imaginario de los periodistas. Se puso sobre la mesa cuando alguien externo formuló las preguntas que hicieron reaccionar al gremio. Solo entonces se comprendió que el problema no es únicamente que los medios nacionales no le den la suficiente importancia al departamento, sino que los periodistas chocoanos no estén empoderados de los temas propios con suficiencia e integralidad. Ello robustece los estereotipos existentes.

En esta zona del país se están dejando de conocer unos escenarios que vienen de antes, pero que se han recrudecido y agravado. El periodismo ha caído en el unanimismo, en la carencia de investigación, en el reforzamiento de algunos estereotipos, en la autocensura.

En consecuencia, la ciudadanía no está comprendiendo la realidad y los sucesos de

actualidad como parte de la historia. Esta ceguera les conviene a los actores relacionados con el territorio, las riquezas, la guerra, las políticas y los proyectos locales y nacionales.

La autocensura no es, pues, solo un problema del gremio periodístico, sino un problema público. Si se refiriere a los periodistas, tendría un limitado efecto. Pero vista en una dimensión más amplia, es decir en el marco de los problemas públicos, cobra su verdadera gravedad.

¿Cómo es que no se sabe que la población de un pueblo que era solamente de negros se volvió blanca por la fuerza? ¿La única alternativa de los periodistas es quedarse callados? ¿O existen posibilidades narrativas que cuenten sin contar y sin poner el peligro a quienes cuentan?

Sí las hay. Entre ellas está decir qué pasa, aunque no se mencione quién es el responsable de lo que pasa. Hay otros mecanismos del lenguaje como el uso de metáforas e imágenes. Pero claro, para acceder a estas formas elípticas del discurso es preciso tener muy claros los criterios de calidad del oficio periodístico y dominar diferentes técnicas narrativas.

Entre las causas de la autocensura, como se ve en el caso del Chocó, está la conciencia que los periodistas tengan de las problemáticas de su región. El oficio exige tanta dedicación que los profesionales pocas veces se preparan lo suficiente consultando con asiduidad a los autores nacionales e internacionales de las ciencias sociales, históricas y naturales. Si lo hicieran, podrían acceder a una comprensión más aguda de la realidad que los rodea, a problematizaciones más complejas, a contextos realmente globalizados. Desconocer o disminuir, por ejemplo, la importancia del factor antrópico en la conservación de la biodiversidad, es simplificar el panorama de un departamento golpeado por la muerte y el desplazamiento.

Por su parte, los reporteros de radio del Chocó están haciendo una buena labor de periodismo cívico, al abrir los micrófonos para campañas de donación de dinero en apoyo de los necesitados, mejoramiento de espacios y recolección de basuras. Esta práctica origina un acercamiento de los medios hacia la ciudadanía, la cual agradece poder expresarse.

La gente quiere utilizar los medios de comunicación. Los factores del poder hacen lo propio. Los grupos armados, como se vio, pretenden inclinarlos a sus intereses. Esta atención generalizada indica que la radio, la televisión y los periódicos funcionan, cumplen un papel indispensable para la vida en sociedad.

Pero la responsabilidad social de los medios no se agota ahí. El deber primordial de informar conlleva el de trascender la esfera de lo cívico e impactar en las políticas públicas. Para lograrlo es menester romper la autocensura en todas sus formas, proporcionar información gracias a la cual la población se ubique en las escalas local, nacional y global.

Alguien sugiere cobardía

Una es la posición de los periodistas frente a la autocensura, otra es la de los funcionarios y fuentes. Las autoridades locales casi siempre expresan que tienen puertas abiertas para suministrar información a la prensa. Critican brotes de corrupción en el gremio de los informadores, cuando se trata el tema de la pauta.

Los miembros de organismos de seguridad, en especial de la Policía, manifiestan su disponibilidad permanente para proteger a los periodistas que se sientan amenazados o que soliciten medidas especiales. Se quejan en ocasiones de que ciertos profesionales rechazan estas medidas.

Entre los funcionarios de entes de control y del Ministerio Público existe la sensación de que los reporteros están mal preparados, que tergiversan caprichosamente las declaraciones que les conceden o que a menudo se abstienen de formular la denuncia correspondiente en casos de amenaza.

No parecen fluir las relaciones entre la prensa y los funcionarios estatales, que suelen ser fuentes obligadas. Hay prejuicios de lado y lado, desconocimiento de funciones y de temperamento profesionales, desconfianzas, cuando no un abierto resquemor.

En alguna capital de departamento, un funcionario llegó incluso a dudar del uso del término "autocensura". "El periodista que por equis o ye motivo se calla –sostuvo– no incurre en un acto de autocensura. Para mí es un acto de cobardía".

A continuación explica su opinión: "Ser periodista es tener una vocación. La de convertirse casi en un mecanismo de control social a través de la denuncia. A mí me parece que

nuestro periodismo tiene en sus entrañas una contaminación terrible, por factores explicables. Es la necesidad de comer, vivir, defender su vida".

Para el funcionario, "hoy vemos que los periodistas no son tan periodistas como se creen, sino que buscan un medio de subsistencia que consideran relativamente fácil, y llegan así a distorsionar la información. Tan malo es que no haya información, como que esta no sea real y efectiva, y solo se publique por el afán de no ser 'chiviados'".

"Este ejercicio de libertad de expresión equivocada me parece más grave que la falta de información y mucho más riesgosa –insistió–. Hoy muchas personas que tienen información valiosa se abstienen de entregarla a la prensa por temor a que salga distorsionada".

Como es de esperarse, este planteamiento levantó entre los periodistas una reacción con espíritu de cuerpo. Es interesante observar el diálogo público que despiertan estas palabras. Una profesional de la televisión respondió: "Estoy de acuerdo con algunas de las cosas que dice el funcionario, porque él conoce la región y le han tocado situaciones muy difíciles. Pero les cuento mi caso: me declararon persona no grata en el concejo de la ciudad, me cerraron un programa del canal local por sugerencia de la Policía. No he sido cobarde en ningún momento. He establecido límites, guardo la independencia y no me he muerto de hambre. No nos ha faltado la decisión de cumplir con el propósito de informar'".

Otro comunicador terció desde un ángulo diferente: "La autocensura es responsabilidad de toda la sociedad. ¿En qué medida las organizaciones de nuestra sociedad hacen que una persona pueda hablar sin cobardía, para que el periodista pueda ejercer su función social? ¿Qué tanto las instituciones hacen posible que el ejercicio del periodismo se cumpla en forma digna y no tengamos que autocensurarnos por cuestiones económicas o por miedo?".

El funcionario, a su turno, replicó: "El miedo se da no solo en el periodismo. Se presenta en cualquier actividad que realice una persona. El problema no es ponerle un escolta ni llevárselo a Bogotá, como hace el Ministerio del Interior. Debemos retroalimentarnos para pensar qué pasó para que yo, como periodista o ciudadano en ejercicio de cualquier profesión, haya caído víctima de una amenaza. No se puede ser periodista solo porque se tiene comezón de informar".

Este intercambio de dardos entre el funcionario y los reporteros continuó con intervenciones que ilustraron aspectos conocidos de la autocensura y sobre la percepción que los dos estamentos mantienen sobre ellos. Los periodistas insistieron en que el Estado es el que más coarta la libertad de expresión y limita a los informadores. "Si una emisora pasa un programa que esté por fuera de los parámetros políticos del Estado –advierte uno de ellos–, amenazan con quitarle la licencia y cancelarle la credencial al periodista".

Con ironía traen a colación una definición de héroe: "dícese de la persona que no pudo salir corriendo". Y continúan: "El periodista aquí no es cobarde. En ocasiones tenemos hambre, vivimos de la pauta. Así no tenga un papel que diga que soy comunicador social, me jacto de decir que me da gusto trabajar en lo que hago. Nos da miedo, sí. Hay colegas a los que callan si no les dan la pauta. Yo mismo, al hablar de las organizaciones narcoterroristas, nunca diré lo que hacen la Policía o el Ejército".

"Somos independientes en un noventa por ciento –continúa el testimonio –. Muchas veces también nos 'manosean' [manipulan]. Pero hay quienes tenemos el valor de quedarnos callados en vez de vociferar que nos 'manosean' y no nos dejamos. Además, los funcionarios públicos no aceptan un trabajo nuestro que no haga parte de lo que se llama 'periodismo positivo'. Hay colegas que devengan un salario y se atreven a molestar a un funcionario. En estos casos, los que reciben la queja son directamente los directores de los medios a los que les piden la cabeza del periodista".

En este punto, una periodista intervino para introducir nueva problemática. "Con las campañas políticas hay autocensura. Si un periodista no está con un candidato, corre el riesgo de que cuando este suba a la gobernación no le paute en su programa. Al contrario, si uno entrevista un día a un político, ese día se dice que ese periodista es de él. Los mandatarios 'manosean' la información y a los periodistas, y eso es autocensura".

La misma profesional expuso entonces uno de los dramas de las condiciones de trabajo en que se debaten los periodistas regionales. "Manejo dos páginas en un diario. Si la noticia es política, hablo de eso; si es una liberación, hablo de eso. Hacemos de todo, no nos especializamos en un tema. Soy profesional universitaria, sin embargo me pagan el mínimo. Trabajo como redactora y como fotógrafa. Gano más como fotógrafa, pero me gano los problemas con el periodismo".

La reacción defensiva desencadenada por las palabras del funcionario mencionado creó la sensación de que los periodistas de la región cumplen con su función de modo más o menos adecuado y, sobre todo, sin cobardía. Basta con formular una pregunta desde otra perspectiva, para que la situación quede más clara.

"¿Cuál es la calidad del producto informativo que se está entregando a la población, sobre todo si se afirma que el noventa por ciento de los periodistas son independientes? Pongámonos en los zapatos de la gente", preguntó el tallerista.

"Nos falta muchísimo –reconoce un reportero–. Aquí se le dice periodista a cualquier persona, muchos usan la comunicación como un trampolín. Además, ¿cómo puede haber calidad, con el ritmo de trabajo vigente? Trabajamos para llevar mercado a la casa".

A esta autocrítica sigue una intervención en sentido divergente. "La información que se da es buena –arguye otro comunicador–. Nuestros periódicos vienen un poquito 'amarrados' a los intereses de los 'pautantes', pero se da una información que ilustra. No le hacemos seguimiento, pero es cotidiana, se publica y la gente responde a ese estímulo. Cuando escribo, lo hago con responsabilidad, sobre todo para salvaguardarme, ya que si digo una mentira me gano una demanda".

El funcionario volvió a replicar: "Cuando la información de un periódico deja de ser trascendente, ese medio escrito se convierte en un periódico de ayer. Es que la información no puede ser solo información, sino que debe trascender hacia la parte estructural. Aquí cabe la diferencia entre la retórica y la dialéctica. El retórico se queda en puras intenciones, el dialéctico no. Del mismo modo si el periodista no le da trascendencia a la información que obtiene, ahí muere la noticia y va decayendo el *rating*".

A esta altura del debate, se hace evidente una diferencia de fondo entre varias posiciones. Queda en limpio que los periodistas no son cobardes y que sí tienen pasión y vocación por su oficio. De hecho el funcionario solicitó que ningún periodista fuera a publicar que él hubiera afirmado "que los periodistas locales son unos cobardes, porque no lo he dicho".

La problemática debe enfocarse desde las circunstancias internas y externas que atentan contra la buena información. Las primeras consisten en que falta capacitación del gremio y se agacha la cabeza ante los políticos. Las externas estriban en que el problema de la comunicación no es exclusivo de los periodistas, sino que le pertenece a la sociedad.

Ahora bien, ¿es cierto que el periodismo debe seguir dándole a la gente lo que le gusta? Si los públicos consumen el escándalo del día o la frivolidad o la violencia por la violencia, ¿se debe reproducir esta fórmula solo porque funciona en términos de circulación y sintonía?

O, desde otra óptica, ¿se debe reconocer la urgencia de formar a las audiencias desde la perspectiva de sus verdaderas necesidades informativas? La falta de dilucidar este dilema puede estar en la raíz de la autocensura, al lado del sistema de cupos publicitarios, de la corrupción de los políticos o de las amenazas de los actores armados.

De nuevo surge la dimensión personal del periodista, su formación, su temple ético, su perspicacia para contextualizar, su sabiduría sobre los procesos comunicativos, en fin, su estructura profesional íntegra como factor decisivo en la derrota de la autocensura.

Entre funcionarios

Hay un abanico de críticas y observaciones sobre la labor de la prensa, provenientes de diversas autoridades departamentales y locales, entes de control y representantes del Ministerio Público. Estos funcionarios son fuentes de información naturales para los periodistas, de modo que mantienen un contacto más o menos permanente que podría calificarse como "de poder a poder".

Un procurador regional hizo hincapié en uno de los más frecuentes reclamos contra los comunicadores, que puede estar en el origen de alguna modalidad de autocensura. El funcionario reprochó la falta de preparación de los periodistas en la zona, de lo cual ha resultado que muchas informaciones se presentan con distorsión. Advirtió que, a su juicio, esta práctica se hace "de buena fe".

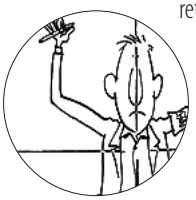
"En el departamento se habla de todo –continúa–, pero sin investigación ni contraste. A veces hablan mal de la gente, sin objetividad. Incluso dicen que los muertos que ha habido es porque 'ellos se lo han buscado'. Aquí los medios hablan de lo que sea y no pasa nada".

El contralor de la misma región reconoció que la pauta estatal se distribuye "a discrecionalidad del gobernante", lo cual es más grave si se tiene en cuenta que la publicidad del sector privado es poca, puesto que el comercio es débil. A esto se agrega que en los últimos tiempos todas las instituciones estatales cuentan con oficinas de prensa, por lo cual los periodistas se acercan más a estas fuentes oficiales.

El personero de un municipio en un departamento donde el conflicto armado atraviesa por un período de relativa calma, informó que desde 2005 no se registran oficialmente ame-

nazas contra periodistas. Sin embargo, este estado de sosiego relativo no debe analizarse sin tener en cuenta otras variables. El mismo funcionario añadió que "los periodistas de la región no tocan temas de conflicto armado, para evitar retaliaciones de los diferentes actores". De manera que hay menos amenazas, porque hay más silencio.

Además, hay otro indicador observado por el personero: "Los medios que más contratos tienen son los que hablan mejor de la administración. El periodismo, por eso, es distorsionado. Los periodistas evitan dar información negativa de las entidades públicas para no sufrir retaliaciones políticas o no ser sancionados por medio de la pauta. Los reporteros son 'toderos' y se leen muchos comunicados".



Los comandantes de Policía o los encargados de las secciones de inteligencia de esta institución suelen dejar en claro que han prestado acompañamiento a periodistas que hacen cubrimientos en zonas riesgosas. No obstante, reconocen que existe la autocensura porque los reporteros poco se atreven a salir de la capital departamental dada la presencia de grupos armados ilegales en las zonas rurales.

Un comandante policial, luego de decir que es muy abierto a brindar declaraciones a la prensa, reafirma la crítica ya anotada varias veces: "Se nota mucha falta de formación en los periodistas –dice–, lo cual a muchos de ellos les ha generado inconvenientes con personas, por el mal manejo que algunos le dan a la información".

Un homólogo suyo, en una región fronteriza, muestra la relación ambigua que muchas veces se presenta entre Policía y prensa: "Yo respeto mucho el trabajo de la prensa acá –dice–, creo que hemos avanzado mucho en la confianza. Cuando yo llegué encontré algunos periodistas que ya tenían medidas de protección de tiempo atrás pero, al disminuir las amenazas, las medidas han sido revaluadas por la disminución del riesgo".

En su testimonio, añade: "No hay situación de riesgo si se tiene en cuenta la versión real de la historia, sin casarse con ninguna fuente de información. Pero hay periodistas que manipulan a los políticos y a mucha gente con la información. Se proponen provocar a la gente y creen que tienen derecho de admisión por ser periodistas. Creen que por ser periodistas tienen patente de corso, desconociendo que ellos también deben acogerse a la norma.

"Claro que cuando un periodista está siendo amenazado, le brindamos acompañamiento,–aclaró–. Actualmente hacemos unas rondas por su vivienda y nada más porque la situación de la región ha venido mejorando".

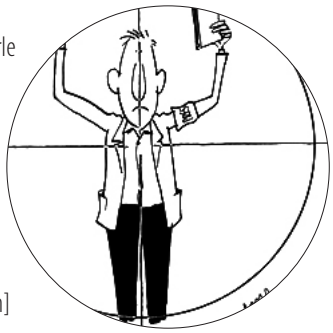
El oficial agrega su particular visión del fenómeno de la autocensura: "La autocensura que puedo vislumbrar es más ética –afirma–, es decir, ante situaciones que hay que prote-

ger y temas especiales por tratar, como homicidios o violaciones. Los periodistas tienen un sentido muy riguroso para dar esta información y no caer en el tratamiento descarnado. Yo lo veo como un avance, cuando se regula la información en función de la ética o en beneficio de las personas afectadas".

Añade que entre los temas que la Policía restringe hacia los periodistas están los internacionales, la incidencia de políticas en los países limítrofes, ya que estas temáticas no le corresponden a la institución. "Yo veo a los periodistas muy juiciosos con sus investigaciones y sus informes", finaliza.

Sobre los procedimientos habituales para estudios de riesgo cuando se presentan denuncias por amenazas, el subcomandante de Policía de otra zona del país explica que estos son iguales para periodistas y para cualquier otro ciudadano y que sus resultados se demoran entre quince y veinte días.

Cada caso de amenaza, ya sea de periodista o de un ciudadano cualquiera, pasa por un comité integrado por el subcomandante de Policía, el comandante operativo, el jefe de Servicios Especializados, el jefe de Protección, un representante de la SIJIN (seccional de Policía Judicial), otro de la SIPOL (seccional de Inteligencia) y uno administrativo. Este comité determina el nivel de riesgo del periodista. Si este no está asociado a cuestiones de su oficio o si fue el mismo profesional quien se arriesgó, el nivel será menor por tratarse de una amenaza personal. En caso de un riesgo mayor, se deben tomar acciones rápidas, como las rondas policiales.



En todo caso, la percepción desde esta institución tiende a restarle gravedad al alto riesgo de la profesión periodística. Es corriente que los funcionarios policiales declaren tener buenas relaciones con la prensa, haber disminuido o eliminado del todo las denuncias de los periodistas y no tener ningún problema con la libertad de prensa. "En el departamento todos los periodistas hablan de todos los temas –suelen afirmar–, y los medios de comunicación 'le dan palo' [critican] a todo el mundo".

El director de la oficina de paz de un departamento altamente conflictivo responde con crudeza al interrogante sobre por qué la prensa no se ocupa del conflicto en su región: "Primero que todo, porque hay muy poca reportería y trabajo de campo, con lo cual la información es oficial en su mayoría. Segundo, porque existe una actitud poco moderna frente al conflicto armado. No hay programas de debate ni opinión, sino una visión muy local. Y tercero, porque los medios regionales están identificados con los poderes tradicionales.

"Existe miedo entre los periodistas", añade el director. "Desde la implementación de la Política de Seguridad Democrática, hay una censura oficial implícita que se imprime o incorpora en la actitud de los periodistas frente a la realidad del departamento y del país. Falta más audacia para recoger información de primera mano, los periodistas se contentan con lo que dan las fuentes oficiales y olvidan que no decir la verdad sobre lo que está pasando es también hacer la guerra".

Es reiterada la protesta de las autoridades locales contra lo que llaman "la manipulación de la información y la tergiversación de la misma según los intereses del comunicador". Algunos de ellos, sin embargo, cuando se les interroga sobre la relación de la institucionalidad con algunos medios de comunicación, responden como lo hace un secretario de gobierno de un alcaldía: "Lo que se espera no es que los medios hablen solo de lo malo, sino que den información positiva de la institución y de lo que hacemos por la comunidad. Reportar asertivamente es también una opción".

El defensor regional del pueblo de la misma región tercia de la siguiente manera: "Realmente no hay condiciones para acceder a la información porque las fuentes las limitan, y en últimas los afectados son los ciudadanos. En la región hay un ambiente generalizado de temor a causa de las acciones armadas ilegales, las irregularidades que vinculan a la fuerza pública y la corrupción. Existe una censura tácita por temor a retaliaciones o por los intereses de los anunciantes".

El alcalde de una ciudad intermedia menciona la situación laboral de los periodistas como asunto preocupante, pero advierte una variable poco analizada: "Mucha gente busca llegar al periodismo –afirma–, como una fuente de ingreso, pero sin conocer el oficio. Su falta de conocimiento del manejo responsable de la información es la que en algunas ocasiones los pone en riesgo, porque la manipulan según el lado en que estén, buscan asidero en los movimientos políticos y, si la administración es de la oposición, toda la información va en contra". El funcionario lamenta el comportamiento de espacios de radio que hacen denuncias de parte de la comunidad, pero "sin ningún filtro y sin que se identifique la fuente, porque no hay investigación previa".

El secretario de gobierno de un municipio en una frontera internacional enumeró las condiciones especiales en que deben trabajar los periodistas. Además de la presencia de subversión, paramilitares, bandas criminales y delincuencia común, la zona presenta contrabando de hidrocarburos, trata de personas y corrupción policial. "Estas circunstancias –explica– dificultan la labor de los comunicadores, por temor o por presiones directas". Y señala otro punto crucial para el periodismo regional: "A pesar de la ausencia de una agremiación conformada que les brinde respaldo a los periodistas, reconozco la unidad y solidaridad entre

ellos. Esto se les ha convertido en un mecanismo de protección, porque cualquier amenaza o agresión la hacen pública en todos los medios de comunicación".

El personero del mismo municipio llama la atención sobre el impacto que las difíciles condiciones socioeconómicas del lugar tienen sobre la libertad de prensa. "La falta de condiciones laborales –explica– hace que muchas personas que no son profesionales asuman el manejo de la información como un negocio".

Lo anterior ha llevado a la proliferación de medios y a la falta de cualificación de los informadores. "No por tener muchos medios de comunicación se está garantizando la calidad en la información", termina el funcionario, quien lamenta que "no todo lo que ocurre en el municipio se transmite. Aquí no se puede hablar abiertamente de los actores armados. Tampoco de las torturas ejercidas por la fuerza pública o de los vínculos entre la Policía, las bandas emergentes y el tráfico y comercialización de estupefacientes".

Los problemas que origina la autocensura parecen haberse enquistado en la idiosincrasia y la práctica política del país. Así lo ve el secretario de gobierno de una alcaldía, también fronteriza: "Los periodistas tocan el tema de los reductos paramilitares y del microtráfico de droga –afirma–, pero de forma muy superficial porque uno como ser humano siente dos clases de miedo: uno que mata y otro que huye. Por otro lado, la corrupción campea no solamente en esta región sino en todo el país y en los organismos del Estado", insistió. "Y estos son factores que se están convirtiendo en una cultura, la cultura de la corrupción".

Otra funcionaria de esta misma ciudad minimiza el riesgo específico de los periodistas, pues conceptúa que cuando se presentan picos de violencia o en épocas preelectorales, se ve afectada cualquier profesión, incluido el periodismo. Piensa que noticias alusivas a la presencia de grupos armados ilegales o a la conversión de la frontera en corredor para sacar droga, sí se ven reflejadas en los medios. "Yo no veo que haya un silenciamiento por temor, o algo así".

En cambio, se refiere a otras temáticas, tal vez menos dramáticas, sobre las cuales sí hay silencio de la prensa. "Hay temas que afectan a la población –explica–, que deben ser objeto de un estudio profundo. La educación, por ejemplo. Hay ausencia de docentes en las escuelas y no se han podido iniciar clases. Los docentes son quienes protegen a los niños hoy, cuando hay desintegración familiar. Sin ellos, los pequeños quedan abandonados y vulnerables al reclutamiento por parte de los grupos armados ilegales. La prensa debería investigar por qué hay colegios pequeños que exigen un mínimo de niños para funcionar".

"Otro tema es el medio ambiente –añadió la funcionaria–. Necesitamos que se verifique y profundice cómo se está invirtiendo el presupuesto del medio ambiente en asuntos

como descontaminación del río, protección de humedales, explotaciones mineras de oro que causan gran deterioro al entorno. Serían ideales investigaciones periodísticas sobre estos temas, que los medios los pongan en la agenda pública".

También el contralor de ese municipio es contundente: "Si bien han disminuido las cifras de homicidios a periodistas, hemos identificado la falta de circulación de información".

El funcionario precisa esta situación para la órbita de los asuntos que maneja. "A mí me corresponde adelantar procesos en el tema fiscal –puntualiza–, y producimos noticias de impacto. Pero los periodistas no tienen claro qué es lo que hace la Contraloría. Creen que podemos manejar temas fiscales, penales y disciplinarios. De modo que es necesario que los comunicadores tengan conocimiento para que la información sea más objetiva y precisa".

El contralor apunta a una costumbre bastante rechazada por los funcionarios estatales, que puede explicar la renuencia de algunas de estas fuentes a suministrar información: "Cuando se hace una declaración a los medios, el tratamiento no ha sido del todo objetivo. Los entrecomillados no son exactamente lo que uno dijo, sino un resumen o una interpretación de lo que dijo el funcionario. Y esto genera bastantes inconvenientes. Los titulares de prensa también son muy delicados. Con frecuencia el desarrollo de la noticia no corresponde a ellos. Por eso sugiero a los medios ser objetivos y no generar daño con la información".

Concluye llamando la atención sobre la ausencia en la prensa de problemáticas y tratamientos que, por ser silenciados, constituyen otra forma de autocensura. "Qué bueno sería que la prensa adelantara investigaciones en temas fiscales que no son muy claros. Las noticias se quedan en cuánto recaudaron y cuánto gastaron, se hace una aparente evaluación, pero las fuentes son únicamente denuncias y quejas. Falta conocimiento del tema".

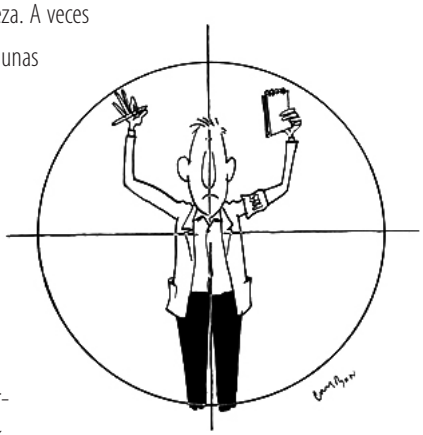
"El tema ambiental falta tocarlo –añade el funcionario–. La gente no sabe por qué está seco el río. En salud, la noticia es si se abre o cierra algún centro del ramo, pero no hay un informe ponderado de lo que ha sido la prestación del servicio por parte de las empresas privadas y públicas. En educación, el tema se queda en el traslado de profesores, pero no hay investigación sobre el porqué de la deserción escolar.

"Sobre las vías solo se habla de pavimentación, pero nunca de los años de retraso en la gestión o de lo que tuvo que hacer la comunidad para lograr esa atención. Estas investigaciones no las va a dar la administración. Las deberían profundizar los medios de comunicación. Los periodistas hablan del día a día. Y solo cuando el principal diario local habla de eso, los demás medios replican", explica.

Como otro tipo de fuente informativa, diferente y complementaria a la de los funcionarios estatales y de control, el directivo de una fundación dedicada a la defensa de los derechos humanos pone los puntos sobre las íes en lo relativo al funcionamiento del gremio periodístico y a las temáticas que se silencian por motivos poco evidenciados.

"El conflicto no ha pasado y se quiere, desde los medios, vender la idea de que ya se acabó –plantea–. Parece que hubiera una intención de subestimar, desconocer u ocultar lo que ocurre. Homicidios, intimidación hacia líderes comunales y organizaciones de derechos humanos, presencia de actores ilegales en distintos municipios: la autoridad local y regional trata de desconocer estos hechos, la Policía en ocasiones no recibe denuncias para no tener registros.

"Solo las grandes cadenas nacionales de radio son independientes, pero tienen poco interés sobre estos temas –añade–. Cuando ellos nos consultan es porque el hecho es muy significativo. El diario local más importante es parcializado y con unos intereses muy fuertes. Lo que no le sirve, lo cuelga, y es el único medio de su naturaleza. A veces trabajamos con los periodistas, pero la noticia no sale porque hay unas relaciones detrás de los medios".



Para el directivo: "Los demás medios, los pequeños, están dedicados al comercio de la información. El periodista te quita plata si quieres que salga la nota. Son gente que arrienda un espacio en radio y que en medio de la informalidad laboral se vuelven manipuladores de la información. Si los patrocina fulano o zutano, se dedican a cuidar la imagen de estos personajes.

"Hay unos que tienen testaferros para contratar con la gobernación y así mantener ellos la imagen pulcra de periodistas idóneos –dice–. Toda información tiene precio. Los periodistas trabajan casi en condiciones de mendicidad, pidiendo 'la liga'. Otro problema es que los periodistas editan lo que les dicen las fuentes, porque el jefe les dice que 'suavicen' las declaraciones. Los periodistas aquí no tienen la posibilidad de acceder a nuevos medios que asuman posiciones de independencia, siempre tienen que estar enganchados a alguno, sujeto a intereses".

En palabras del directivo: "Los periodistas son un grupo vulnerable, aquí se generan muchos riesgos, pero no por el producto de su labor sino porque ellos mismos amenazan y extorsionan. Resalto, eso sí, el papel de los medios nacionales. De diez llamadas a consultas, siete son de estos medios nacionales. Muchas veces la información no sale, pero uno nota un interés y una fuerte mirada de parte de los medios nacionales, de otras regiones o internacionales. Ello son los que se han atrevido a tocar temas como la palma, el despojo de tierras, el paramilitarismo, la parapolítica y la corrupción".

El defensor del pueblo de otro departamento ratifica, a su manera, esta visión y habla incluso de "compra de periodistas", para referirse a la presión institucional por medio de la pauta, el aumento del uso de publirreportajes, la presión del narcotráfico, el exceso de información institucional y la omisión de las autoridades ante las violaciones y agresiones.

"Usualmente las denuncias que se presentan en el departamento no salen en los medios locales sino en los de Bogotá, y a través de medios alternativos", continúa el funcionario, señalando el carácter marcadamente regional de la autocensura. El mapa de la realidad colombiana se logra finalmente establecer gracias al trabajo de los medios nacionales, pero las poblaciones de las diferentes regiones están privadas de su propia información local. Es allí, en la Colombia profunda, donde sucede la guerra y donde los políticos recogen sus votos a la hora de las elecciones.

El defensor agrega otra práctica atentatoria contra la libre circulación de la información: "Se han presentado restricciones a la libertad de prensa a través de los procedimientos de adjudicación de frecuencias y espacios de televisión, pues las licitaciones de los noticieros en los canales públicos regionales son revaluadas cada año por parte de la gobernación".

Otros funcionarios se quejan de que los periodistas mantienen un bajo índice de denuncias ante los entes competentes, en caso de ser amenazados. Algunos atribuyen esta conducta a la desconfianza generalizada en el aparato de justicia por la impunidad. Algunos periodistas aducen que la amenaza se ha naturalizado y ha entrado a formar parte del panorama profesional, hasta el punto de que muchos no identifican que los están amenazando o presionando. En otras ocasiones afirman que denunciar pone en riesgo al que denuncia.

Un defensor del pueblo departamental resalta como factor de amenazas "los altos y fuertes grados de intolerancia existentes en la zona". Estos generan acciones de rechazo contra algunos periodistas "por impresiones dejadas al aire". Otra fuente de riesgos y choques son las preferencias que tienen quienes distribuyen la pauta oficial con algunos medios. En este sentido la falta de una política pública en materia de asignación de pautas origina gran riesgo para los periodistas.

El estigma indígena

El departamento del Cauca es uno de los más complejos en materia de conflicto armado. Además de un abigarrado panorama de presencia y alianzas entre grupos armados de toda índole, es quizás la zona del país donde la variable cultural se agrega a la militar con importancia similar.

En efecto, la contundente organización de la población indígena, sus movilizaciones y su capacidad de comunicación en la escala nacional e internacional, hacen que el conflicto en el Cauca revista gravedades sin par con el resto del país.

Desde la óptica de la fuerza pública, existe apoyo a los grupos insurgentes de parte de sectores de la población civil, específicamente de los indígenas. De parte de la guerrilla de las FARC se han multiplicado las acciones de hostigamiento contra municipios de población preponderantemente indígena.

Se sabe de una extraña alianza entre la guerrilla del ELN y la banda emergente de "Los Rastrojos", para combatir a las FARC. El Gobierno nacional ha respondido a esta convulsión con la creación de batallones de alta montaña y de contraguerrilla. Los campos minados y el desplazamiento forzado contribuyen a hacer caótica la realidad del departamento.

Un funcionario describe así el efecto de la militarización evidente de la cotidianidad: "Hay muy poco espacio para la población civil". En medio de todos los fuegos, los indígenas nasas, paeces y guambianos mantienen una posición de defensa de sus tradiciones, sus tierras, su justicia, sus autoridades y su cultura.

Esta conducta erguida no es nueva. En los albores del siglo XX el líder nasa Manuel Quintín Lame condujo en el sur una rebelión que duró exactamente los mismos años de la Primera Guerra Mundial y sentó las bases espirituales para la futura creación del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC; más adelante lo sucedieron dirigentes como el sacerdote católico indio Álvaro Ulcué.

El país se ha acostumbrado ya a las imágenes de las marchas o mingas indígenas que parten del departamento del Cauca, pasan por la ciudad de Cali y en ocasiones llegan a Bogotá con sus reivindicaciones. Tal vez el ícono principal de ellas son los miembros de la guardia indígena que, validos de bastones, ponen en práctica una disciplina que proviene de las autoridades comunitarias.

La aguda militarización de la vida, la presión de los múltiples grupos armados y el hecho de que las nuevas estructuras de las fuerzas armadas tengan como área de operación los municipios de Corinto, Miranda, Toribío, Jambaló, Caloto, Caldono y Silvia, han contribuido a que las comunidades indígenas consideren que la militarización pone en mayor riesgo a los comuneros, por las acciones armadas que allí se generan.

Además de su complicada convivencia entre todos los fuegos, estos indígenas cargan con el peso de la estigmatización, a la cual contribuyen tanto los medios de comunicación como los periodistas individualmente, que no comprenden esta cultura diferente y que no ven con ojos igualitarios a los comunicadores de las emisoras y medios indígenas.

Esta situación ha llegado al punto de generar inconvenientes para los periodistas de los medios comerciales, quienes manifiestan no contar con el apoyo de la población civil en las zonas rurales. Los corresponsales de las principales cadenas de televisión afirman, incluso, haber sido víctimas de agresiones de parte de la población rural y en especial de la indígena al hacer cubrimientos de orden público.

Los profesionales se acercan a estas poblaciones sin entender las prácticas indígenas y, en consecuencia, critican y cuestionan sus trabajos. No comprenden la gran diferencia existente entre sus medios y los de las comunidades. Estos son agentes activos de la cultura, defienden sus lenguas, sus tradiciones, sus puntos de vista y sus movilizaciones.

Los indígenas, por su parte, denuncian que los medios privados de carácter masivo no permiten que otros grupos sociales, como ellos, se vean representados. Critican su carácter homogenizante, a contracorriente de la Constitución Nacional que los incluye y reconoce bajo los postulados de una Colombia multiétnica y pluricultural. De ahí que se movilicen para conseguir sus propios medios de y desde las comunidades.

Además de la radio, hoy utilizan los impresos, el video y la web. Los comuneros han creado colectivos de comunicación indígena que se agrupan en la Asociación de Medios de Comunicación Indígena de Colombia, AMCIC. Estos comunicadores informan a la población de base, con una plataforma política sostenida en la resistencia civil pacífica. Incluyen en sus contenidos la lucha social indígena, el combate a la discriminación y la visibilización de los derechos humanos.

Las emisoras comunitarias, propiedad de los cabildos, tienen como función ser formadoras de la organización y arriesgarse frente a los actores armados por el manejo de temáticas sensibles. "No nos matan porque somos juiciosos y obedientes y no nos metemos en temas delicados", puntualiza un comunicador indígena.

Los comunicadores indígenas obedecen a procesos y legislación propios. No trabajan con el mismo concepto de imparcialidad que rige al resto de sus colegas de medios comerciales. Son conscientes de ello. Un ejemplo se da durante los constantes hostigamientos y enfrentamientos en los resguardos desde donde emiten.

Han optado en estos casos por "no hacerle juego a la guerra" y entonces en los momentos de confrontación entre actores de la guerra, sus equipos transmiten música propia. Es una forma de autocensura, derivada de un mecanismo de resistencia, con unos fundamentos en su idiosincrasia.

De esta manera, los medios indígenas recrean el panorama cultural propio y lo enfrentan al mundo en términos de negociación simbólica. Esta clara postura les ha acarreado un sinnúmero de confrontaciones con otros sectores de la sociedad, retenciones de material periodístico y de equipos de cómputo, destrucción de infraestructura comunicativa, bloqueos de páginas web, detenciones de comunicadores por parte de la fuerza pública y constreñimiento para que abandonen sus territorios.

También se han presentado robos y daños de equipos, antenas y cables, que dejan a las emisoras por fuera del aire durante muchos meses, dados los altos costos de las reparaciones y reposiciones. Los documentos alusivos a la resistencia indígena, a pesar de ser de carácter pacífico, son tomados en ocasiones como material subversivo.

Un funcionario de un municipio con población indígena afirma que ha tenido que brindar acompañamiento a comunicadores indígenas en casos de abusos de la fuerza pública que, durante los cubrimientos, los detiene y les retiene material periodístico.

La estigmatización ha llegado hasta instancias institucionales superiores. Comunicadores guambianos denuncian obstáculos de parte del Ejército por transmitir en su propio idioma. En un consejo comunitario en Popayán el Presidente de la República ofreció el pago

de recompensas a quienes dieran información para identificar a indígenas participantes en acciones de "liberación de la madre tierra", que es una práctica cultural propia.

Como si lo anterior fuera poco, los indígenas sienten que incluso los medios de comunicación no indígenas del departamento los estigmatizan, muestran una imagen negativa de ellos y los acusan de estar con los grupos armados. A causa de este tipo de cubrimiento que consideran sesgado, los comunicadores indígenas tienen recelo ante los reporteros. El enfrentamiento ha ido hasta el extremo de que los indígenas les apliquen castigos propios de su cultura, como una manera de aleccionarlos.

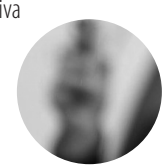
Los periodistas y corresponsales, por su parte, responden que en ocasiones los enfoques de sus notas son cambiados en Bogotá y que ellos no tienen control sobre la manera como se presenta la información. Pero las comunidades no perciben esta intermediación de los editores centrales y señalan a los reporteros locales como responsables. De esta manera se afecta la credibilidad de la prensa en general frente a la población.

Otra muestra de discriminación, alegada por los indígenas, es el sucinto cubrimiento que los medios locales hacen de la problemática indígena. Esto es más evidente si se tiene en cuenta que hay hechos noticiosos protagonizados por las comunidades, que trascienden de lo regional a lo nacional e incluso lo internacional, pero que los medios locales apenas registran con notas breves. De hecho, se da un desconocimiento de "lo otro" y de su entorno cultural.

Estigmatización, discriminación y roces con los colegas de los medios masivos, son elementos que obstaculizan la libre circulación de información dentro de los pueblos indígenas y de estos hacia la gran prensa. Constituyen, pues, formas de censura que se transforma en autocensura, en el caso de los medios comerciales, y en desconfianza y resquemor, en el de los medios indígenas. En ambos casos es la población del departamento la que ve coartado su derecho a la información.

Para informar mejor

En vista de que los componentes de la autocensura provienen de causas variadas, es necesario formular recomendaciones desde distintos campos para superar esta práctica violatoria del derecho a la información. Los periodistas consultados en el presente proyecto propusieron las que se presentan a continuación.



Se debe partir de que la responsabilidad de la autocensura no es exclusiva de los periodistas y de los medios de comunicación. Abarca a todo el conjunto de la sociedad que ha de amparar aquel derecho de todos. De modo que el alcance de las medidas contra la autocensura llega hasta el propio Estado y sus políticas, pasando por las empresas de los medios, la sociedad civil, las modalidades formales e informales de la academia, y los organismos nacionales e internacionales de cooperación.

El primer deber del gremio periodístico y de sus integrantes es hacer consciente el fenómeno de la autocensura, combatir su conversión en algo natural y cotidiano del ejercicio profesional, aclarar en sus mentes que la información no es algo prescindible ni aleatorio sino necesario para la convivencia en sociedad y el funcionamiento de la democracia.

Se ha trabajado mucho contra la censura. Los periodistas son ultrasensibles a cualquier intento oficial de imponerla. No así contra la autocensura. Como esta es un mecanismo instalado en el interior del comunicador, sin necesidad de que nadie se lo recuerde en cada momento, se cree que no existe, que no es tan grave, que no perjudica a nadie.

A la censura abierta, a las amenazas, a los riesgos evidentes, se responde con medidas de protección para los periodistas. Pero cuando la amenaza ha logrado penetrar en la mente del comunicador, luego de que este ha comprobado la frecuente ineficacia de las medidas y la impunidad en que quedan los crímenes de sus colegas, no hay rondas policiales ni carros blindados ni escoltas que consigan sembrar otra vez la confianza y alejar el miedo.

De ahí la importancia de los constantes ejercicios de autoanálisis sobre las lagunas informativas con que se está sirviendo la información a la población. Es decisiva, de igual forma, la identificación entre colegas de aquellos vacíos de formación que impiden enriquecer la agenda informativa y que silencian temas como los de medio ambiente, cultura, salud, educación, con el argumento de que no venden o no interesan a los editores centrales.

La autocensura no es solo asunto de miedo. También es resorte de las pésimas condiciones laborales y salariales de los reporteros, lo mismo que de la categoría de criterios que estos tengan sobre lo que merece ser noticia. Igualmente importante en la derrota de la autocensura es la eficiente capacitación que tengan los periodistas sobre el uso y posibilidades del lenguaje.

En lo que toca a las dificultades económicas, es imperioso buscar mecanismos para una redistribución equitativa de la pauta oficial. Aquí cumplen un papel preponderante las agremiaciones periodísticas. Algunas de ellas han comenzado a proponer fórmulas que se están considerando y debatiendo. Una de ellas sugiere que estos gremios, y no los mandatarios regionales, se encarguen de distribuir la pauta. Hay quienes advierten sobre la necesidad de superar la condición de ser miembro de alguno de esos gremios para recibir participación.

Cualquiera que sea la modalidad que se encuentre, es conveniente aclarar la naturaleza del negocio patente en el sistema de cupos y venta de publicidad. El periodista no vende ni su conciencia, ni la totalidad del tiempo o espacio de su programa o periódico. El anunciante adquiere solamente una porción de ellos para hacer publicidad a su negocio. Pero no puede esperar la venia incondicional del comunicador en la orientación de su medio.

De todas maneras, es inconveniente la mezcla del oficio de periodista con el de publicista o vendedor de anuncios. Así como lo es la de periodista y político, o la de periodista y asesor de campañas electorales. En la práctica, los reporteros regionales se ven obligados a conjugar estas actividades contrapuestas, pero se deben tener claros los límites entre unas y otras, lo mismo que la necesidad de ponerle punto final a esta costumbre viciada.

Entre las alternativas sugeridas por los periodistas se encuentra la creación de una asociación de medios comerciales o alternativos, que busque relaciones con clientes publicitarios potenciales. Funcionaría como una agencia de publicidad, que libere a cada periodista de la penosa labor de pedir "la liga", es decir la contribución publicitaria, o de salir a la calle

con la grabadora en una mano y el contrato de publicidad en la otra.

Otra iniciativa de los comunicadores propone realizar trabajos periodísticos mediante la modalidad de proyectos que sean financiados por entidades nacionales o internacionales, patrocinadoras de investigaciones. Ya hay experiencias en este sentido, como las becas concedidas por la Fundación Avina para producción de material periodístico de largo aliento o la asesoría y financiación concedidas por Reporteros de Colombia a profesionales previamente capacitados en los diplomados de Medios para la Paz.

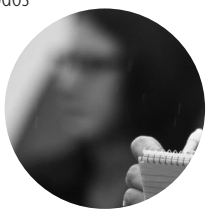
Periodistas regionales sugieren que el Estado proporcione mecanismos para que ejerzan sus actividades sin autocensura. Cabe la posibilidad de que se ofrezcan bonos u otro tipo de incentivos. Un Estado Social de Derecho, como el colombiano debería garantizar que la información sea tratada efectivamente como un derecho.

En las zonas saturadas de amenazas y riesgos, bien de parte de los actores armados, bien de los políticos y mandatarios corruptos, hay una fórmula de oro para investigar y publicar sin ponerle el pecho a las balas. Es el trabajo en grupo, que ofrece varias modalidades.

Una de ellas es la conformación de *pools* o conglomerados de medios, concertados para publicar al mismo tiempo un tema que, por espinoso, sea un peligro para uno solo de ellos. El país tiene experiencias en este sentido, protagonizadas por diarios de envergadura, emisoras y canales que han enfrentado al narcotráfico o a las mafias de corruptos, en investigaciones delicadas. La publicación conjunta les hace el quite a los violentos. Esta práctica sería viable igualmente en las regiones.

Antes de llegar a este modelo entre medios, es posible prepararlo con otras formas de labor en equipo. Es el caso del trabajo de campo en zonas de peligro, a donde se puede ir en red. Es más fácil amenazar y amedrentar a una persona, que a un grupo de colegas conectado y que actúe como una unidad. Cuando está de por medio la seguridad, marchar en solitario es complicado, lo mismo que buscar el protagonismo individual.

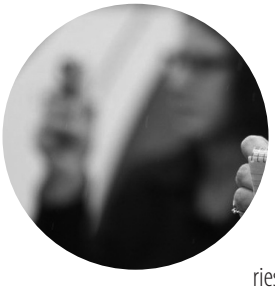
Es posible conformar equipos investigativos con periodistas de medios afines, radio, prensa, televisión, a manera de blindaje en materia de seguridad. "Si todos trabajamos en el mismo sentido, tendrán que matarnos o amenazarnos a todos", explica un reportero.



Esto obviamente supone ir más allá del deseo de la primicia o "chiva", y la compresión de que la verdadera competencia se dirime en el tratamiento que cada profesional le da al material investigado de modo colectivo. Hay aquí un desafío de solidaridad gremial y de reacomodo de los valores vigentes para medir la calidad periodística. No se trata, entonces, de quién tiene la "chiva", sino de quién cubre mejor la historia.

Un resultado positivo de esta práctica conjunta sería la posibilidad de establecer agendas informativas propias de los comunicadores, que se separen de la molienda oficial de noticias dirigidas desde las administraciones locales. De esta forma entrarían en el horizonte informativo temas regionales, usualmente desdeñados por los editores centrales o las directivas nacionales de los grandes medios.

Desde otro ángulo, no habría que esperar a que los medios nacionales toquen ciertos temas para que los regionales se atrevan a tratarlos. Es preciso, pues, persistir en mostrar otras historias y evitar volverse periodista de gobernación y alcaldía, que "salta de una plazoleta a otra".



Además del trabajo en equipo con colegas de la misma región, es dable la colaboración entre periodistas regionales y nacionales. Cuando un material local resulte demasiado delicado, quien lo haya trabajado puede enviarlo a un colega de un medio capitalino de mayor envergadura, para que no se pierda su publicación. De esta manera rompe la autocensura, logra que se conozca por otra vía la información y protege su nombre de eventuales riesgos. Lo importante en este caso es la denuncia, no quién la hace.

Existen zonas donde imperan pugnas entre colegas, que perjudican el flujo adecuado de información hacia la población. En algunas se habla de "guerra entre micrófonos", en otras se oponen los periodistas de medios comerciales a los comunicadores indígenas. Para estos casos, los periodistas regionales proponen crear comisiones facilitadoras, conformadas por personas que procuren solución de manera interna y discreta. Estos mediadores actuarían como mecanismo de autorregulación interna del gremio periodístico y evitarían la intrusión de las autoridades con normas, que serían vistas como intervención oficial o censura.

Es conveniente también propiciar espacios de trabajo conjunto entre representantes de los periodistas e instituciones como la Defensoría del Pueblo, la oficina de Derechos Humanos de cada gobernación, la Personería, funcionarios del Ministerio del Interior, entre otras. Podrían ser mesas de garantías, orientadas al seguimiento sistemático de la protección y de la prevención del riesgo para periodistas. Estas instancias disminuirían la presión de la autocensura.

Es imperioso solicitar a la Fiscalía resultados en las investigaciones sobre crímenes cometidos contra periodistas. Se ha insistido en que la impunidad hace que los periodistas no pongan en conocimiento de las autoridades las amenazas que reciben porque no creen en los efectos de esas denuncias. Si no hay denuncias, las autoridades consideran que la situa-

ción es normal. Por su parte, los periodistas van haciendo íntimo el mecanismo automático de la autocensura.

A este respecto, los periodistas regionales tienen algo claro. "Lo que no queremos –plantean– es protección policial únicamente. Debemos empezar a luchar por una protección en otros aspectos, como condiciones laborales y garantías en el ejercicio del periodismo, tanto para los medios regionales grandes como para los pequeños".

Las agremiaciones periodísticas cumplen un papel fundamental en la derrota de la autocensura. Convocan a los socios a cohesionarse, para protegerse como cuerpo. En esta tarea es importante que establezcan alianzas con la academia, con los teóricos de la comunicación que, por su perfil, entrenamiento y dedicación, contribuyen a visualizar los brotes de autocensura y a proponer nuevos caminos para el oficio. A su turno, las universidades pueden aprovechar el contacto con los profesionales, que tienen la experiencia del día a día.

A las asociaciones periodísticas les corresponde pensar en términos de políticas públicas para las comunicaciones. Deben contribuir a la formulación de proyectos de ley, como aquel consagrado a solucionar el problema de la distribución de la pauta oficial. A las organizaciones nacionales les atañe la convocatoria a un movimiento integral de los periodistas en pos de sus reivindicaciones.

Según algunos reporteros, convendría que estas agremiaciones cuenten con sus propios medios de comunicación e incursionen en televisión, radio e Internet, y que lideren una red alternativa de denuncia de los casos de vulneración del derecho a la información.

Las asociaciones harían bien en propiciar un clima de camaradería en el seno de los trabajadores de la prensa. Es preciso extirpar la costumbre de alinear en un bando a los colegas que cubren determinada fuente, sea armada o política. Es frecuente el caso de periodistas que se abstienen de informar sobre un grupo específico, precisamente para evitar ser identificados con el mismo y conservar así la neutralidad. O el de comunicadores que no se atreven a publicar materiales que critiquen a un bando, para que no se les tilde de pertenecer al contrario. Esto es especialmente delicado en la atmósfera de polarización que se generó en el país, en la cual todo es blanco o negro y no hay escala de grises.

Se oyen autocríticas de periodistas que no denunciaron a los paramilitares cuando estaban en el punto máximo momento de su poder. "Lamento haberme autocensurado –dice uno de ellos–, no haber investigado las firmas que financian al paramilitarismo en la región.

Eso ha llevado a que estemos en la lista y a que hayan matado a compañeros en el departamento. Tampoco investigué cómo el paramilitarismo se financió con el dinero del Estado. Si no me hubiera autocensurado habríamos tenido una carta de defensa de nosotros mismos, porque si algo puede defendernos es nuestro trabajo investigativo serio".

Los reporteros deben tener en cuenta que una medida de protección indispensable es la solidaridad. En algunas zonas la estigmatización entre colegas ha llegado al colmo de perder la confidencialidad y de levantar sospechar de todos con todos, porque "uno no sabe con quién está nadie". Estas aguas turbias en el gremio son propicias para que la autocensura florezca.

Recurrir a Internet ofrece posibilidades de publicación, capacitación y conexión, muy útiles como herramientas para ejercer un buen periodismo. Esto a pesar de que el acceso a la web es todavía limitado para buena parte de la población.

Por otra parte, la capacitación es otro puntal contra la autocensura. Los periodistas no siempre tienen consciencia de la necesidad de formarse continuamente en muchas materias y de construir criterios prácticos para resolver los dilemas éticos. No obstante, se oyen voces preocupadas por la preparación profesional. "No nos podemos olvidar del pasado –plantea un colega–, como si el momento que vive el país fuera fruto del presente. Si no tenemos la historia en la cabeza, las noticias nos atropellan y nos pasan por encima".

El periodista añade: "Si uno tiene elementos, se puede cuestionar la verdad que nos tratan de vender. Tenemos como siete verdades, ¿con cuál nos quedamos? Si yo no tengo criterio, si no conozco la historia y la geografía de este país, cometo muchísimos errores y termino aceptando las verdades de otros, que no son la verdad".

Lo propio ocurre con el tratamiento de los comunicados y boletines de prensa emitidos por las oficinas de comunicación de las diversas entidades oficiales o de la fuerza pública. Estos buscan que los periodistas adopten la versión de esas entidades. Los reporteros deben comprender que esos materiales son apenas parte de la historia, pero no la historia misma. No pueden convertirse en meros escribientes o altoparlantes.

Las empresas periodísticas, como parte de la sociedad civil, tienen responsabilidad en la derrota de la autocensura. Aparte de lo que obviamente les compete en términos de salarios y condiciones laborales, deben respaldar el trabajo de sus reporteros. Es muy distinto ingresar a zonas peligrosas como individuos aislados, así se demuestre la calidad de periodistas, que como trabajadores de un medio de comunicación que brinda identificación profesional, seguros contra imprevistos y convalidación del ejercicio investigativo ante las autoridades y los grupos al margen de la ley.

El periodismo regional agrega al vértigo habitual de la profesión, el hecho de que los reporteros son "toderos". Muchos lamentan que por el exceso de trabajo y la falta de tiempo, no haya oportunidad para pensar, planificar y construir las notas con mayor calidad. Esta queja señala un atenuante, pero no una justificación para la mala calidad periodística.

¿Por qué en estos casos de velocidad, el reportero escribe y edita lo que escribe y no otra cosa? En el debate con periodistas de una región, se concluyó que esto sucede precisamente porque existen mecanismos inconscientes, reflejos condicionados de trabajo, que inducen semejantes resultados. Pero con una buena formación, es posible llegar a productos diferentes en el mismo tiempo y con igual celeridad.

Si se identifican aquellos mecanismos inconscientes y se adquieren criterios periodísticos claros, en el momento del afán y del exceso de trabajo saldrán a luz, también impulsados por reflejos condicionados de otra índole, más o menos conscientes, contenidos diferentes a los que hasta el momento solían brotar. El cerebro del periodista, que por norma trabaja bajo presión y según rutinas implacables, responderá con textos renovados.

La capacitación permite, de igual forma, fortalecer habilidades como la de distinguir entre los diversos niveles de abstracción tratables en la información. Sobre cualquier tema es posible hablar de una manera muy concreta, con nombres, cifras, datos, pruebas, o de una manera más abstracta que aluda al sistema de fondo que hay detrás de todo acto.

En ese sentido, en momentos en que sea muy peligroso hacer una denuncia abierta, el periodista puede poner el dedo en la llaga de la estructura política, social o económica que hace posible y explicar la anomalía ocurrente. Esto es, pasar de denunciar a enunciar.

Por supuesto que la denuncia vende más, porque es escandalosa, pone en la picota a los dirigentes corruptos, causa escozor y comentarios. Pero cuando haya un alto grado de riesgo en la denuncia, la única alternativa no es quedarse callado. Aplicando su imaginación y creatividad, a propósito del hecho en cuestión, el periodista puede enunciar la naturaleza de la cultura que tiene al país como lo tiene.

La cultura de la ilegalidad, por ejemplo, pudo haber sido menos tolerada por los medios. En la época del despeje en San Vicente del Caguán, cuando el gobierno retiró a la fuerza pública de una extensa área para adelantar en ella diálogos con las FARC, algunos periodistas se abstuvieron de denunciar las anomalías sucedidas dentro de esa zona, porque pensaban que eso pondría en riesgo las conversaciones de paz. De otro lado, durante el proceso de entrega de armas de los paramilitares, algunos reporteros pudieron haber contribuido a generar la idea de que el paramilitarismo había sido un mal menor.

Un caso, para ilustración. En una ciudad intermedia asesinaron al sobrino de uno de los principales narcotraficantes extraditados. La noticia tuvo repercusión nacional, pero los me-

dios locales la manejaron "con pinzas". Titularon hablando de la muerte "de un comerciante". La directora de un noticiero de televisión de la zona relató así su comportamiento: "Nosotros hicimos las imágenes, pero a mí como directora me dio miedo pasarlas y lo que se me ocurrió fue compartirlas con los otros noticieros".

Al analizar con posterioridad el hecho, los periodistas concluyen que habrían podido narrar con énfasis en el contexto, omitiendo el parentesco de la persona asesinada, para evitar riesgos. Lo que tiene que saber la sociedad es cuántos asesinatos de ese tipo han ocurrido en la región, cuáles son las investigaciones sin concluir y qué consecuencias públicas tienen las venganzas en el seno de la mafia.

Otra posibilidad de contar un hecho esquivando el peligro frontal, es la de realizar una narración que contenga varios elementos, dentro de los cuales se incluye el tema deseado. Al insertar la denuncia en una historia que abarque contenidos más amplios, se evita atraer la atención sobre ese único punto, sin omitirlo. Es una especie de filtración oblicua del tema.

Esta actitud supone una confianza en las audiencias. Frente a estos materiales más abstractos o diluidos, la gente va a completar por sí misma en su lectura el cuadro de la realidad, añadiendo nombres y otros detalles informativos que el periodista no pudo hacer públicos. Para esta función complementaria ayuda mucho el rumor, la versión boca a boca, que corre sobre todo en las regiones sin que nadie pueda controlarla.

Los reporteros regionales proponen, finalmente, un perfil de su oficio: "Ni héroes, ni muertos de hambre. Queremos dignificar la profesión, que nos miren con respeto. Si sentimos amor por nuestra profesión debemos luchar hasta el último día. Nosotros no tenemos la solución, la estamos buscando".

Arturo Guerrero

Bogotá, 25 de agosto de 2010

Consideraciones de la Fundación para la Libertad de Prensa y Medios para la Paz

Consideraciones de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y Medios para la Paz (MPP) sobre la autocensura en el periodismo regional

Distintas instancias nacionales e internacionales han coincidido en reconocer avances significativos en la protección de periodistas en Colombia. Mientras que en el 2000, la FLIP registró ocho asesinatos de reporteros por razones del oficio, en el 2008 no hubo y en el 2009 se presentó uno. Sin embargo, el periodismo se sigue ejerciendo en un ambiente adverso a la libertad de expresión, especialmente a nivel regional.

A la par con las agresiones tradicionales contra periodistas (amenazas, detenciones ilegales, obstrucciones, etc.) se ha vuelto común el silencio forzado por razones más sutiles y menos perceptibles. Prácticas como las limitaciones al acceso a la información pública, la presión de la pauta publicitaria, las denuncias judiciales sin justa causa, la impunidad y las precarias condiciones laborales, entre otras, constituyen formas reiteradas de afectación a la libertad de expresión que tienen graves consecuencias en el ejercicio periodístico.

Pero tal vez uno de los ataques más complejos contra la libertad de expresión, y en muchas regiones el más frecuente, viene de la autocensura. Este es un fenómeno poco estudiado, incluso no hay una definición única, y su identificación y medición no se logra a simple vista. Sin embargo, está claro que cuando un periodista o un medio de comunicación toma la decisión de no publicar información de interés público para proteger sus intereses que pueden verse afectados (económicos, políticos, laborales o de seguridad), se está limitando su derecho a reportar libremente pero, sobre todo, el derecho de los ciudadanos a estar informados.

La autocensura se ha convertido en la medida de protección más eficaz para los periodistas. En parte ello explica la disminución en la cifra de asesinatos de periodistas. Muchos reporteros han entendido que no es necesario publicar información que los ponga en riesgo,

basta con guardar silencio para que se imponga la voluntad de quien los quiere silenciar. Como bien lo ha señalado el periodista Javier Darío Restrepo: "Un periodista que se autocensura representa, para quien lo ha amenazado, un triunfo total, porque ha logrado que la orden de silencio llegue a la conciencia del periodista y desde allí siga impartiéndose y ejecutándose, lo cual convierte al periodista en cómplice involuntario del censurador."[2]

Convencidos de que *ante la dificultad de denunciar, la última opción debe ser callar,* la FLIP y MPP emprendieron la iniciativa de estudiar y analizar la situación de autocensura en las regiones del país. Esta es una primera aproximación empírica a este fenómeno que procura lograr una comprensión de las causas de la autocensura, sobre por qué no se está publicando información de interés público, los temas que se quedan por fuera de la información de los medios, los efectos sobre las prácticas periodísticas, y las medidas que se pueden tomar para prevenir y combatir la autocensura.

Por supuesto, este ejercicio no pretende otra cosa que ser un aporte más a la discusión sobre la libertad de expresión, las prácticas periodísticas y la seguridad de los reporteros en las regiones de Colombia.

---

2 . Restrepo, Javier Darío. *Los dilemas de la autocensura.* En: FLIP- MPP. *Autocensura y prácticas periodísticas regionales.* Informe multimedia, Bogotá, 2010.
www.flip.org.co/autocensura, http://www.mediosparalapaz.org/autocensura/

Los temas que "no se tocan"

Hay temas de interés público y por ende susceptibles de reportería, pero que son "intocables" para los periodistas. Temas que salen de la agenda informativa por temor a que su publicación afecte los privilegios de los comunicadores, restrinja la pauta o, en algunos casos, ponga en riesgo su vida. No solo se refiere a historias relacionadas con la situación de orden público. La corrupción administrativa o problemáticas sociales cotidianas también son temas sobre los cuales los periodistas a veces prefieren guardar silencio.

El surgimiento de organizaciones ilegales como "Los Rastrojos" y "Los Paisas" en Córdoba, los corredores del narcotráfico en Chocó o el desplazamiento forzado en Catatumbo, son temas que se evitan. Tampoco es frecuente que el periodismo local trate temas relacionados con los derechos de las víctimas, los abusos de las fuerzas armadas, los vínculos entre grupos armados y la clase política o el despojo de tierras a comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas. Todos estos hechos afectan e interesan a los ciudadanos. Como bien lo dijo una periodista local: "Lo que no se dice, la gente lo reclama". En el caso particular de las historias sobre paramilitarismo, "la gente pregunta dónde estábamos los periodistas cuando todo pasaba", aseguró otro reportero.

No solo se abandonan temas de violencia y narcotráfico. La corrupción estatal y privada también es pasada por alto. En Caquetá no se cuestionan las decisiones de las administraciones y en Chocó poca gente habla en público de la minería ilegal. Aspectos de alto interés, como el manejo irregular de las regalías, la contratación o la financiación de las campañas políticas, son ignorados en las agendas informativas de los medios locales.

Según los periodistas consultados con ocasión de este estudio, otros temas que se evitan frecuentemente a la hora de informar, están relacionados con la vida cotidiana, y que son controversiales. Se trata, por ejemplo, de historias que involucran a la comunidad LGBT, a los indígenas en el Cauca, la violencia sexual y el maltrato intrafamiliar, el atropello del medio ambiente o problemáticas que involucran temas religiosos.

¿Qué está causando la autocensura?

Hay distintas razones para que los periodistas se estén autocensurando: algunos factores externos al periodismo, es decir, derivados del contexto en el que aquellos ejercen su labor, y también factores internos, derivados de las razones personales de cada periodista o del medio para no publicar un tema.

FACTORES EXTERNOS

Están relacionados principalmente con la inseguridad y con factores económicos. Primero, los periodistas temen que se tomen represalias violentas por publicar información. La historia en sus regiones les ha demostrado que hacer públicos ciertos hechos puede implicar peligro para sus vidas: la autocensura funciona como medida de autoprotección. Recibir amenazas, presiones y atentados por parte de actores legales o ilegales, sumado a la desconfianza en las autoridades, son factores para que impere el silencio.

Por otro lado, están las razones económicas. En la mayoría de las regiones la pauta proviene del Estado. Los medios de comunicación y los periodistas prefieren no cuestionar

o denunciar hechos que involucren a sus financiadores. Esa dependencia de la pauta oficial hace que los medios privilegien los recursos públicos que los sostienen económicamente a la información que publican. Antes de que las administraciones les quiten la pauta por alguna información que se publique en su contra, los medios prefieren no meterse con el bolsillo que les da de comer.

FACTORES INTERNOS

También hay factores que se dan al interior de las salas de redacción. Varios medios tienen una línea editorial poco independiente o vinculada a iniciativas más allá de las informativas. En esos casos, los reporteros prefieren no tocar los intereses que tiene su empleador para evitar que se ponga en peligro su trabajo. También se presentan situaciones en las que los medios y los periodistas no tienen la preparación suficiente para cubrir temas o no consultan fuentes distintas a las habituales, ni contrastan la información.

¿Cómo combatir y prevenir la autocensura en el periodismo regional?

Hay algunas medidas que pueden asumir los medios de comunicación, los periodistas y las autoridades para prevenir y combatir la autocensura. Lo que se presenta enseguida no intenta ser una receta para seguir al pie de la letra, sino recomendaciones que aportan a comprender y evitar situaciones futuras.

AL PERIODISMO REGIONAL:

- No naturalizar la autocensura: debe identificarse, reconocerse y evitarse. Ni la autocensura, ni las amenazas, deben hacer parte del *"kit* básico del trabajo".
- La asignación de pauta, especialmente oficial, debe estar basada en criterios claros, objetivos y transparentes. Cuando una entidad del Estado pauta no le está haciendo un "favor" al medio, sino que está cumpliendo con su deber de dar a conocer las gestiones y servicios que se le ofrecen a la comunidad. La pauta no debe ser un factor que condicione la información.
- Los directivos de medios de comunicación deben incentivar y promover la independencia y capacitación de sus periodistas. Eso permite calidad y credibilidad.
- Se debe evitar la relación rotativa de los periodistas con la política. No se puede tener "doble camiseta" sin afectar directamente la calidad de la información.
- Los periodistas deben construir agendas temáticas propias que no respondan a los intereses de sus fuentes de información. Esto les da independencia y les permite trabajar enfoques diferentes.
- El rigor y la ética en la investigación periodística son algunos de los mejores mecanismos de autoprotección.
- La agenda informativa es amplia y diversa. Los periodistas no se deben dejar llevar por los prejuicios sociales sobre ciertos temas de interés público (temas sexuales, religiosos, género, étnicos, medio ambiente, LGBT).

A LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO:

a. Ministerio Público y Ministerio del Interior y de Justicia

- Los Comités de Derechos Humanos y las Mesas Regionales y Nacionales de Prevención deben estar al tanto de las medidas de protección que aprueba el Programa de Protección de Periodistas y Comunicadores del Ministerio del Interior y de Justicia.
- Es importante hacer un esfuerzo especial en la identificación de los periodistas en riesgo como consecuencia de acciones violentas, otorgándoles medidas de protección adecuadas e individualizadas. Si los periodistas se sienten protegidos y tienen confianza en las instituciones del Estado, tienen tranquilidad de informar.

b. Autoridades locales

- Deben entender que el papel de los periodistas es informar, no ser una caja de resonancia de las autoridades. Parte de su labor consiste en cuestionar las decisiones oficiales y contrastar su información con otras fuentes.
- Es pertinente generar mecanismos preventivos específicos sobre los factores de riesgo de poblaciones como los periodistas y comunicadores sociales, dadas las características especiales de su labor.

c. Secretaría de gobierno

- Activar una ruta de protección para periodistas similar a las establecidas por el Ministerio del Interior para otras poblaciones en riesgo, como por ejemplo la desplazada.
- Aplicar acciones conjuntas para una efectiva protección a los periodistas.

d. Fiscalía General de la Nación

- Mejorar la capacidad de respuesta y dar celeridad a las investigaciones judiciales por agresiones y amenazas contra periodistas.
- Ser más receptivos ante las denuncias de los periodistas, respetar sus derechos como víctimas y hacer la investigación en un término razonable. La impunidad es un incentivo para seguir violando los derechos de los periodistas.

RECOMENDACIÓN GENERAL:

La ciudadanía, las autoridades y los periodistas deben entender que éstos ejercen un oficio indispensable para garantizar derechos fundamentales (libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a la información), que afectan a la sociedad en general. Por ello se deben promover acciones afirmativas para la protección de los periodistas como grupo poblacional.

La Corte Constitucional ha reconocido que los reporteros son sujetos de especial protección debido al alto impacto social de su labor. Es necesario adoptar medidas contundentes para detener las amenazas, hostigamientos y ataques físicos, además de las agresiones indirectas, provenientes de distintos actores, que buscan censurar a quienes ejercen el derecho a libertad de expresión y la libertad de prensa.

imágenes

(cc)

http://www. flickr/ervega

http://www.jrmora.com/blog/

http://www.residencia.csic.es/ruedo/exposicion/censura_eng.htm

http://elmensajerodelotrolado.wordpress.com/2010/08/07/el-periodismo-militante/

http://ciperchile.cl/2010/08/09/periodistas-mexicanos-"ni-uno-mas"/

http://www.newsmatic.e-pol.com.ar/index.php?pub_id=481&sid=4067&aid=41942&eid=21&NombreSeccion=Tu%20ciudad&Accion=VerArticulo

http://www.mcshuibhne.com/tag/medios-comunicacion/

http://oierr.wordpress.com/2008/03/

http://www.nature.com/nature/journal/v443/n7110/full/443392a.html

Agradecimientos a Mateo y sus composiçoes y al Bloque y su portada.

Los reporteros regionales de Colombia, que encuentran sus historias en fuentes directas y que muchas veces padecen las consecuencias de estas historias, no las están relatando. No están contando todo lo que tienen que contar. El país lejano que ellos conocen es silenciado. Los periodistas han hecho un pacto tácito para salvaguardar sus vidas y las de sus familias.

Si bien los grupos violentos y los políticos corruptos son los responsables de buena parte de las amenazas y atentados contra comunicadores, las condiciones laborales y el sistema de consecución de avisos publicitarios son mordazas eficaces a la libertad de información.

De esta manera se configura un mapa de la realidad perforado por omisiones. La población muchas veces se entera de los sucesos por la vía del rumor o por las alertas que dan las comunidades, pero estos hechos no reciben el espacio ni el reconocimiento que debería darles la prensa. Por eso, después de períodos de masacres o de atentados contra los derechos humanos, la gente se pregunta: ¿dónde estaban los periodistas cuando todo esto pasaba?

MPP
Medios para la Paz

FLIP
FUNDACIÓN PARA LA LIBERTAD DE PRENSA

CON EL APOYO DE:

USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

EMBAJADA DE NORUEGA